



Consejo Económico y Social

Distr. general
25 de septiembre de 2025
Español
Original: inglés
Español, francés e inglés
únicamente

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Cuarto informe periódico que Eslovaquia debía presentar en 2024 en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto* **

[Fecha de recepción: 31 de octubre de 2024]

* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.
** Los anexos del presente documento pueden consultarse en la página web del Comité.



I. Cuestiones generales

Introducción

1. La República Eslovaca, en su calidad de Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, el Pacto), presenta al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (en adelante, el Comité) informes sobre la aplicación del Pacto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Pacto.
2. La República Eslovaca tiene el honor de presentar el cuarto informe periódico sobre la aplicación del Pacto (en adelante, el informe), en el que se ofrece información sobre las medidas adoptadas y los avances logrados en el respeto de los derechos reconocidos en el Pacto en el período comprendido entre 2019 y 2024.
3. El informe fue elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, en cooperación con los ministerios pertinentes, sobre la base de las directrices del Comité y de conformidad con las recomendaciones aprobadas por el Comité el 14 de noviembre de 2019¹ tras el examen del tercer informe periódico de la República Eslovaca, presentado en 2019².
4. La República Eslovaca cumple las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos.

Artículo 2

Garantía del ejercicio de los derechos sin discriminación

5. Durante el período sobre el que se informa, Eslovaquia presentó su 13º informe periódico sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial³ y su séptimo informe periódico sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer⁴.
6. En abril de 2021, el Gobierno aprobó la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Igualdad de Oportunidades (2021-2027) y el Plan de Acción correspondiente (en adelante, el Plan de Acción para la Igualdad). En enero de 2022, el Gobierno aprobó el Plan de Acción Nacional para la Prevención y la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (2022-2027). El documento estratégico más reciente en este ámbito es el Plan de Acción Nacional para el Empleo de las Mujeres (2022-2030) (en adelante, el Plan de Acción para el Empleo de las Mujeres).
7. El Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (en adelante, el Ministerio de Trabajo) coopera con el Centro Nacional de Derechos Humanos de Eslovaquia en la ejecución de las tareas derivadas de estos documentos estratégicos, en particular en lo relativo a las actividades de formación, sensibilización y seguimiento.
8. Con el fin de eliminar la discriminación estructural contra las personas con discapacidad, en abril de 2021 el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional para la Desinstitucionalización del Sistema de Servicios Sociales y de Acogimiento Familiar (esta información también sirve como respuesta a las cuestiones planteadas por el Comité en los párrafos 16 y 17 de sus observaciones finales).
9. En el marco de las tareas legislativas, se aprobó la Ley núm. 376/2022 de Progenitores de Acogida Profesionales, que contribuye de manera sustancial al proceso de desinstitucionalización de los centros para niños y familias.

¹ E/C.12/SVK/CO/3.

² E/C.12/SVK/3.

³ CERD/C/SVK/13.

⁴ CEDAW/C/SVK/7.

10. En el marco de las medidas no legislativas, se está ejecutando el proyecto Aplicación de la Garantía Europea para la Infancia: inclusión de los niños con discapacidad en el contexto de la desinstitucionalización del acogimiento familiar, implementado por conducto de la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales (DG REFORM) de la Comisión Europea, en cooperación con la Oficina Regional del UNICEF para Europa y Asia Central. El proyecto nacional Desarrollo de la Aplicación de las Medidas de Protección de la Infancia y Tutela Social respalda el proceso de desinstitucionalización del acogimiento familiar.

11. Los objetivos de la Estrategia Nacional para la Desinstitucionalización del Sistema de Servicios Sociales y de Acogimiento Familiar se detallan en el Plan de Acción Nacional para la Transición de la Atención Institucional a la Atención Comunitaria en el Sistema de Servicios Sociales (2022-2026). La desinstitucionalización de los servicios sociales también figura en otros documentos estratégicos, a saber, las Prioridades Nacionales para el Desarrollo de los Servicios Sociales (2021-2030) y el Programa Nacional para la Mejora de las Condiciones de Vida de las Personas con Discapacidad (2021-2030).

12. Entre 2018 y 2023 se llevó a cabo el proyecto nacional Desinstitucionalización de los Servicios Sociales – Apoyo a los Equipos de Transformación, con el objetivo de respaldar la elaboración de planes de transformación e iniciar el proceso de desinstitucionalización a nivel comunitario. Un total de 90 instituciones de servicios sociales completaron el proyecto. La evaluación del grado de preparación de los centros constituyó un documento de referencia que servirá de base para elaborar los planes de transformación de centros específicos, tanto en lo relativo a los servicios sociales como a la activación y el empleo de las personas usuarias en esos centros, así como a las modificaciones del entorno físico de las instalaciones, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

13. El Proyecto Nacional de Seguimiento (2024-2028) garantizará la continuidad del apoyo al proceso de transformación tanto para los centros de servicios sociales que ya cuentan con un plan de transformación como para aquellos que deseen incorporarse al proceso. El proyecto incluirá también actividades de información en los ámbitos de los derechos humanos y de los servicios sociales centrados en las personas, así como actividades para ayudar a los proveedores a utilizar métodos de trabajo innovadores con usuarios con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista y a cumplir las normas de calidad aplicables a los servicios sociales.

14. El Ministerio de Trabajo promueve también el desarrollo de los servicios sociales comunitarios mediante los servicios de atención a domicilio. El cuarto proyecto nacional, Apoyo a los Servicios de Atención, introduce un cambio para los proveedores al establecer que la persona beneficiaria reciba directamente una asignación por hora de servicio, por un importe de 7,93 euros. Los fondos pueden emplearse para cubrir todos los gastos vinculados a la prestación de los servicios de atención. Se trata del primer paso hacia la futura reforma de la financiación de los servicios sociales. El proyecto busca ensayar una nueva modalidad de concesión de un beneficio estatal —la asignación de atención—, con el fin de que la propia persona en situación de necesidad pueda decidir qué servicio social requiere.

15. El apoyo a los servicios sociales de ámbito comunitario forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, que prevé una inversión de 175 millones de euros (IVA excluido). Su objetivo es aumentar la capacidad tanto de los centros de servicios sociales para pacientes ambulatorios como de los centros comunitarios que prestan servicios sociales residenciales de aquí a abril de 2026. En la actualidad, 28 de los 90 centros que cuentan con un plan de transformación elaborado en el marco del proyecto Desinstitucionalización de los Servicios Sociales – Apoyo a los Equipos de Transformación ya participan en las actividades de inversión.

16. Para promover la vida independiente de las personas con discapacidad grave, la Ley núm. 447/2008 de Prestaciones Monetarias para la Compensación de las Discapacidades Graves desempeña un papel fundamental. Esta ley permite conceder diversos subsidios financiados con fondos del presupuesto estatal, entre ellos el subsidio para asistencia personal, el subsidio de atención, el subsidio para cubrir gastos adicionales, el subsidio para

la adquisición de ayudas técnicas y el subsidio para adaptar un apartamento o vivienda familiar.

Artículo 3

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres

17. La República Eslovaca aplica las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer aprobó en 2023 en sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Eslovaquia⁵.

18. En el Plan de Acción para la Igualdad (2021-2027), la República Eslovaca aprobó medidas en ocho ámbitos estratégicos: dignidad e integridad física; conciliación de la vida familiar y laboral; educación, ciencias e investigación; igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, dependencia económica y pobreza de las mujeres; participación política y económica y participación en la adopción de decisiones; establecimiento de mecanismos participativos e instituciones para promover la igualdad de género; inclusión de grupos vulnerables y discriminación múltiple contra las mujeres y los menores de edad de ambos sexos; y cooperación internacional para el desarrollo y asistencia humanitaria.

19. El Plan de Acción para la Igualdad se complementó con el Plan de Acción para el Empleo de las Mujeres, que introdujo nuevas medidas destinadas, en particular, a mejorar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, así como a ampliar sus oportunidades educativas y de desarrollo de competencias. Las tareas previstas en estos documentos abarcan medidas de carácter legislativo, formativo, metodológico, de seguimiento y estructural.

20. Entre las tareas estratégicas destinadas a reforzar la igualdad entre mujeres y hombres figuran, por ejemplo, mejorar las condiciones para conciliar la vida laboral y familiar; aumentar el empleo de las personas con responsabilidades parentales —en especial de las mujeres— y promover medidas que faciliten su reincorporación al mercado de trabajo tras la licencia parental; y aclarar el sistema para evitar que la licencia de maternidad o parental tenga efectos negativos en la determinación de las prestaciones del seguro social. También se contemplan la educación de los jóvenes en igualdad de género e igualdad de oportunidades, la elaboración de medidas para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres y la creación de condiciones equitativas para mujeres y hombres privados de libertad, ya sea en detención o mientras cumplen una pena de prisión.

21. Un avance legislativo importante para promover la igualdad entre mujeres y hombres fue la introducción de una licencia de paternidad remunerada de dos semanas, que puede tomarse dentro de las seis semanas posteriores al nacimiento del niño, independientemente de que la madre del niño reciba una prestación de maternidad o una prestación parental. Esta modificación legislativa también busca fomentar una mayor participación de los padres en el cuidado del hogar y de los hijos.

22. El proyecto Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo tenía por objetivo contribuir al desarrollo de medidas sistémicas destinadas a aplicar una política de conciliación de la vida familiar y laboral. En ese marco se elaboraron diversos documentos orientados a promover la igualdad de género en el ámbito del empleo, entre ellos la Metodología para realizar auditorías de género en la República Eslovaca, la Metodología para aplicar la igualdad de género y la conciliación de la vida familiar y laboral en el mercado de trabajo, el Sistema para verificar metodologías externas, el Sistema de normas para llevar a cabo auditorías de género, el Estudio analítico de los costos y beneficios de aplicar la igualdad de género en el mercado de trabajo y el Concepto para la conciliación de la vida privada, familiar y laboral.

23. El Plan de Acción para la Igualdad prevé diversas tareas formativas, entre ellas promover y mejorar la calidad de las resoluciones judiciales en casos relacionados con la discriminación y los derechos humanos de las mujeres, incluida la violencia contra la mujer. La Academia Judicial, responsable de la formación de jueces, fiscales y personal judicial, ha

⁵ CEDAW/C/SVK/CO/7.

organizado numerosas actividades centradas, por ejemplo, en la jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de violencia doméstica y víctimas de violencia doméstica y abusos sexuales, así como en cuestiones específicas del derecho antidiscriminatorio.

Artículo 6

Derecho al trabajo

24. La información que figura a continuación también complementa las respuestas proporcionadas al Comité en relación con las cuestiones planteadas en los párrafos 20 y 21 de las observaciones finales, relativas al desempleo, las disparidades regionales en el mercado de trabajo y los obstáculos que encuentran los migrantes y los solicitantes de asilo para acceder al mercado de trabajo.

25. En el Plan de Acción para la Igualdad se establece que debe prestarse una atención especial a las mujeres en situación de desventaja que buscan empleo. Los empleadores pueden solicitar un subsidio destinado a apoyar la contratación de personas desempleadas en situación de desventaja. Desde 2023, se considera en esta categoría a las personas que hayan dejado de percibir una prestación de maternidad o una prestación parental menos de dos años antes de su inscripción en el registro de personas desempleadas y que no hayan tenido ingresos procedentes de un empleo remunerado o un empleo por cuenta propia durante el período en que recibieron dichas prestaciones. La medida tiene por objeto fomentar el empleo de las mujeres.

26. En el contexto de la situación en Ucrania, el Plan de Acción para el Empleo de las Mujeres incorporó una medida destinada a prestar asistencia específica a las mujeres beneficiarias de protección temporal, cuyo objetivo es ofrecer asesoramiento individualizado que incluya, por ejemplo, información sobre el mercado laboral eslovaco, apoyo en la comunicación con empleadores y acceso a formación.

Desempleo

27. En 2013, la tasa de desempleo de larga duración en la República Eslovaca era del 11,6 %, según datos de Eurostat. El país se fijó como objetivo reducirla por debajo del 3 % para 2020. Aunque en 2016 todavía se situaba en el 6,8 %, frente al 4,3 % registrado en la Unión Europea, para 2020 había disminuido gradualmente hasta el 3,7 %, mientras que la media de la UE era del 2,4 %, lo que representa una reducción del 46 %. La pandemia de COVID-19 interrumpió esta evolución positiva y la tasa aumentó al 4,1 % en 2022, en comparación con el 2,4 % de la UE. Como resultado de las medidas adoptadas para combatir el desempleo de larga duración, volvió a descender hasta el 3,8 % en 2023. A lo largo de todo el período, la tasa de desempleo de larga duración en la República Eslovaca se mantuvo por encima de la media de la UE, que fue del 2,1 % en 2023.

28. A finales de 2023, había 69.953 personas en situación de desempleo de larga duración, lo que representaba el 41,17 % del total de solicitantes de empleo. El Plan de Acción para seguir reforzando la integración de las personas en situación de desempleo de larga duración en el mercado de trabajo con miras a 2030 debería contribuir asimismo a mejorar esta situación. Las medidas incluidas en el Plan de Acción están dirigidas a todas las personas en situación de desempleo de larga duración, sin distinción.

29. Como consecuencia de la crisis económica, Eslovaquia registró un elevado desempleo juvenil, que alcanzó casi el 35 % en 2013. La mejora gradual de la situación económica y las medidas adoptadas para apoyar el empleo juvenil invirtieron esta tendencia, y en 2018 la tasa descendió al 15,8 %. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto especialmente negativo en los jóvenes, cuya tasa de desempleo aumentó hasta el 20,6 % en 2021.

30. La situación también se deterioró entre los jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación. La proporción de jóvenes menores de 29 años en esta situación aumentó hasta el 15,2 % en 2020. Tras las medidas adoptadas, la situación del mercado laboral se estabilizó y la tendencia del desempleo juvenil comenzó a acercarse de nuevo a los niveles anteriores a la pandemia. En 2022, la proporción de jóvenes menores de 29 años que ni

trabajan ni estudian ni reciben formación en Eslovaquia se situó en el 12,3 %, frente al 11,7 % registrado en la UE. Según Eurostat, la tasa de desempleo de los jóvenes de hasta 24 años fue del 19,9 %, en comparación con el 14,5 % en la UE. La República Eslovaca se ha comprometido a reducir el número de jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación hasta alcanzar la media de la UE, que es del 9 %, para 2030.

Medidas para reducir el desempleo

31. Eslovaquia ha abordado todas las formas de desempleo con el fin de reducir las disparidades regionales en el mercado de trabajo. Se han aplicado medidas activas de política de empleo dirigidas a todas las personas solicitantes de empleo, con especial atención a quienes se encuentran en situación de desventaja, sin distinción por razones como la raza, el color o el origen nacional o social, siempre que cumplan los requisitos de acceso. La reducción de las disparidades regionales se lleva a cabo mediante la Ley núm. 336/2015 de Apoyo a los Distritos Menos Desarrollados, que permite aplicar de forma conjunta diversos instrumentos, medidas y recursos para impulsar el desarrollo económico y social y promover el empleo.

32. Para reducir la tasa de desempleo de larga duración, se han puesto en marcha diversas medidas, como una ayuda económica para apoyar la contratación de personas en situación de desventaja, una ayuda destinada a fomentar el desarrollo del empleo local y regional y una ayuda para actividades de inserción laboral en forma de servicios comunitarios de pequeña escala para los municipios o las regiones autónomas. Asimismo, se han llevado a cabo varios proyectos nacionales, como “Oportunidad de empleo”, “Queremos ser activos en el mercado de trabajo”, destinado a personas mayores de 50 años, “Salir del ciclo del desempleo”, “Buscamos trabajo juntos”, “Participación de las personas desempleadas en la restauración del patrimonio cultural” e “Incrementar la actividad hacia el empleo”.

33. El Plan de Acción para seguir reforzando la integración de las personas en situación de desempleo de larga duración en el mercado de trabajo con miras a 2020 se elaboró en 2016, de conformidad con la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 15 de febrero de 2016 sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral. La introducción de los Acuerdos de Integración Laboral, junto con el fortalecimiento de la cooperación con los empleadores, constituyó una herramienta clave para mejorar la integración de estas personas en el mercado de trabajo.

34. En 2021 se aprobó el nuevo Plan de Acción para seguir reforzando la integración de las personas en situación de desempleo de larga duración en el mercado de trabajo con miras a 2030, en el que se establecen la normativa y las actividades de todas las instituciones implicadas, con el fin de asegurar un enfoque integral.

35. En 2023 se elaboró el Plan de Acción para el Fomento de la Economía Social y las Empresas Sociales con miras a 2030. Este plan da continuidad a la Ley núm. 112/2018 de Economía Social y Empresas Sociales, que permite a estas entidades cumplir distintos tipos de objetivos de interés social y promueve la contratación de personas en situación de desventaja y vulnerabilidad.

36. La Unión Europea respondió al empeoramiento del desempleo juvenil mediante la aprobación de la Recomendación del Consejo de 30 de octubre de 2020 titulada “Un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil”. En respuesta a esta recomendación, la República Eslovaca aprobó un plan nacional para fortalecer la garantía juvenil con miras a 2030. El plan tiene por objeto promover el trabajo con jóvenes, el asesoramiento, la elaboración de planes de acción individualizados, la evaluación de aptitudes —en particular digitales, ecológicas y emprendedoras— y apoyar la creación de empleo mediante ayudas financieras, prácticas para titulados y el empleo por cuenta propia. Está dirigido al alumnado en riesgo de abandono escolar temprano y a los jóvenes en riesgo de exclusión social.

37. Para contrarrestar la tendencia negativa del desempleo entre los jóvenes menores de 30 años, Eslovaquia ha puesto en marcha medidas en el marco de proyectos nacionales y convocatorias de proyectos orientados a la demanda. Se concede especial importancia al desarrollo de aptitudes ecológicas, digitales y emprendedoras, incluida la promoción de empleos sostenibles y verdes. En 2024 se puso en marcha el proyecto Derecho al Primer

Empleo, que permite a los empleadores solicitar el reembolso del 90 % del costo total del trabajo de una nueva persona empleada durante un período de seis meses.

38. La Estrategia de Igualdad, Inclusión y Participación de los Romaníes hasta 2030 incluye un plan de acción para el período 2022-2024 en el ámbito prioritario del empleo, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad y aumentar el nivel de empleo de la población romaní mediante la creación de oportunidades que faciliten su integración en el mercado de trabajo. Uno de los objetivos establecidos para este ámbito prioritario es aumentar la proporción de personas empleadas de las comunidades romaníes marginadas de entre 20 y 64 años, para elevarla del 20 % al 45 %.

39. En su Declaración Programática para el período 2023-2027, el Gobierno se comprometió a apoyar políticas destinadas a reducir las disparidades sociales y regionales y a crear nuevos empleos en las distintas regiones. Asimismo, el Gobierno respaldará todas las formas de economía social y, en particular, el emprendimiento social, a fin de que ninguna persona en situación de desventaja quede privada de la oportunidad de trabajar.

Legislación para promover el empleo de nacionales de terceros países, con especial atención a los nacionales de terceros países beneficiarios de protección internacional (para más detalles, véase el anexo)

40. La Ley núm. 92/2022, por la que se establecen otras medidas relacionadas con la situación en Ucrania, entró en vigor el 30 de marzo de 2022.

41. La Ley núm. 488/2022, por la que se modifica la Ley núm. 5/2004 de Servicios de Empleo y que entró en vigor el 1 de enero de 2023, estableció condiciones adicionales en materia de empleo de nacionales de terceros países, con el fin de facilitar su acceso al mercado de trabajo.

42. La Ley núm. 160/2024, por la que se modifica la Ley núm. 404/2011 de Residencia de Extranjeros y que entró en vigor el 15 de julio de 2024, introduce disposiciones relativas al empleo de nacionales de terceros países beneficiarios de protección internacional.

43. Un nacional de un tercer país que sea solicitante de asilo y esté autorizado a acceder al mercado de trabajo por una normativa especial, o que haya obtenido asilo, protección complementaria o protección temporal, puede ser empleado conforme a la Ley de Servicios de Empleo sin necesidad de presentar ni el certificado para cubrir un puesto altamente cualificado, ni el certificado para cubrir una vacante, ni el permiso de trabajo.

Artículo 7

Derecho a la remuneración y derecho a una remuneración justa

44. El derecho de toda persona empleada a recibir una remuneración por el trabajo realizado que le permita disfrutar de un nivel de vida digno está garantizado en la Constitución. La aplicación de este derecho en la práctica se regula mediante una legislación laboral específica, en particular la Ley núm. 311/2001 del Código del Trabajo y la Ley núm. 663/2007 del Salario Mínimo. La Ley del Salario Mínimo es una norma de carácter general que se aplica a todas las personas empleadas, tanto en el sector privado como en el sector público.

45. El salario mínimo está garantizado tanto a las personas empleadas como a quienes trabajan en virtud de acuerdos para la prestación de servicios fuera de la relación laboral. Los derechos establecidos en la Ley del Salario Mínimo se aplican por igual a quienes perciben su remuneración conforme al Código del Trabajo y a quienes trabajan en el sector público o en la función pública, cuya remuneración se regula mediante normas especiales.

46. La Ley del Salario Mínimo también se aplica a las personas empleadas con baja cualificación y a las personas empleadas nacionales de terceros países, y se aplica por igual a mujeres y hombres, sin distinción.

47. El salario mínimo ha aumentado cada año, pasando de 520 euros en 2012 a 750 euros en 2024, lo que representa un aumento del 44,23 %. La Ley del Salario Mínimo exige que su

cuantía se determine mediante un acuerdo entre las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores y, en caso de no alcanzarse dicho acuerdo, establece que el salario mínimo se fijará como una proporción del salario nominal medio de las personas empleadas en la economía nacional correspondiente a dos años antes. Este sistema garantiza un cálculo realista del salario mínimo y aumentos previsibles, y es plenamente respetado por todos los interlocutores sociales (esta información también sirve como respuesta a las cuestiones planteadas por el Comité en los párrafos 24 y 25 d) de sus observaciones finales).

Salarios y condiciones de trabajo de las mujeres

48. La igualdad de remuneración por un trabajo igual o de igual valor es uno de los derechos fundamentales regulados expresamente en el Código del Trabajo. Este derecho está orientado a aplicar el principio constitucional de igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo. Su incumplimiento constituye una forma de discriminación estructural, cuyas consecuencias negativas se traducen en un fracaso sistémico para alcanzar la igualdad de género y reducir la pobreza de las mujeres.

49. La importancia de este derecho se ha reflejado en las medidas adoptadas, entre ellas la reforma de la remuneración del personal docente y de otras profesiones con una presencia de mujeres superior a la media; la elaboración de propuestas para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres; el análisis de la figura jurídica de la igualdad salarial; el seguimiento del cumplimiento del principio de igual remuneración; y la reducción de la brecha salarial mediante la aplicación de buenas prácticas de otros países. También se han adoptado medidas destinadas a promover la maternidad y a valorarla de forma efectiva, tanto mediante apoyos económicos como mediante reconocimiento social.

50. La República Eslovaca está llevando a cabo la transposición de la Directiva (UE) 2023/970, destinada a reforzar la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un trabajo igual o de igual valor mediante medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento.

Igualdad de oportunidades en el empleo

51. Garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo está fuertemente condicionado por estereotipos de género persistentes que limitan enormemente dichas oportunidades. Por ello, la educación reviste una importancia fundamental. El Plan de Acción para la Igualdad incluye tareas orientadas a la realización de actividades preventivas, como conferencias y formación dirigidas al personal docente y profesional de los centros educativos sobre igualdad de género e igualdad de oportunidades.

52. Sobre la base del Plan de Acción para el Empleo de las Mujeres, se llevan a cabo actividades de formación destinadas a eliminar estereotipos y prejuicios hacia las mujeres y los grupos en situación de desventaja. El Plan de Acción también estableció medidas para aumentar el empleo de mujeres pertenecientes a comunidades romaníes marginadas, por ejemplo mediante empresas sociales.

53. Los documentos de política mencionados en el párrafo 6 también abordan la cuestión del trabajo no remunerado realizado por las mujeres. Su objetivo es visibilizar los beneficios económicos del valor de ese trabajo, que recae predominantemente en las mujeres —por ejemplo, el cuidado de familiares cercanos—, y fomentar una distribución más equilibrada de las tareas entre mujeres y hombres, así como la promoción de la maternidad.

54. Las inspecciones de trabajo desempeñan un papel importante en la aplicación práctica de la normativa sobre no discriminación en el empleo y en otras relaciones jurídicas afines. Los resultados de las inspecciones en materia de discriminación e igualdad de género en las relaciones laborales se presentan anualmente y se ponen a disposición del público.

Seguridad e higiene en el trabajo

55. Las cuestiones relativas a la seguridad y la salud en el trabajo también se abordan mediante medidas no legislativas, como la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo y el programa para su aplicación en el período 2024-2027. El objetivo es adoptar y aplicar medidas preventivas eficaces, tanto por parte del Estado como de los empleadores, con el fin

de crear condiciones de trabajo decentes, mantener un número reducido de accidentes laborales, reducir al mínimo los factores que causan las enfermedades profesionales, promover la prevención, reforzar la importancia de una cultura de seguridad en el trabajo y fomentar la sensibilización en este ámbito.

Artículo 8

Derecho a fundar sindicatos

56. La Constitución garantiza el derecho de toda persona a asociarse libremente con otras para proteger sus derechos económicos, sociales y culturales. Las condiciones relativas a la constitución y al estatuto jurídico de las organizaciones sindicales y las organizaciones de empleadores están reguladas por la Ley núm. 83/1990 de Asociación de los Ciudadanos. La normativa aplicable a la actividad sindical no ha variado con respecto al segundo informe periódico de la República Eslovaca (párrs. 121 a 123, 125 y 126)⁶.

57. Eslovaquia es parte en el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98) de la Organización Internacional del Trabajo.

58. Las organizaciones sindicales y las organizaciones de empleadores pueden ser constituidas e integradas por ciudadanos (personas empleadas) y por empleadores. Estas organizaciones tienen personalidad jurídica y la adquieren al día siguiente de la recepción por el Ministerio del Interior de la solicitud de inscripción.

59. La solicitud de inscripción debe ir acompañada de los estatutos. Si se aprueba una modificación de los estatutos, la organización sindical o la organización de empleadores deberá notificar dicha modificación en un plazo de 15 días y adjuntar el texto correspondiente.

60. Los datos de la organización sindical o de la organización de empleadores, incluidas sus modificaciones, se incorporan al registro de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que es gestionado por el Ministerio del Interior de conformidad con la Ley núm. 346/2018 de Registro de las Organizaciones No Gubernamentales Sin Fines de Lucro. En el anexo figura una panorámica correspondiente al período 2019-2024.

61. Una organización sindical o una organización de empleadores puede disolverse por decisión voluntaria o por fusión con otra organización, por una decisión firme del Ministerio del Interior que ordene su disolución, por una decisión firme de un tribunal en un proceso penal o por la declaración de quiebra. La organización deja de existir formalmente en la fecha de su eliminación del registro de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.

62. Si el Ministerio del Interior constata que una organización sindical o una organización de empleadores realiza alguna actividad contraria a la ley, deberá advertirla de inmediato y pedirle que cese esa actividad. Si la organización persiste en dicha conducta, el Ministerio dictará una decisión de disolución, que podrá ser revisada por un tribunal nacional.

Negociación colectiva y derecho de huelga

63. La Constitución y la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales (Ley Constitucional núm. 23/1991) reconocen el derecho de huelga como uno de los derechos sociales de la ciudadanía. La Ley núm. 2/1991 de Negociación Colectiva regula los aspectos básicos del derecho de huelga y el derecho a la negociación colectiva. El fomento de la consulta paritaria entre personas empleadas y empleadores se regula en el Código del Trabajo. En el caso de las profesiones cuya labor resulta inmediatamente necesaria para la protección de la vida y la salud, el derecho de huelga está limitado por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Negociación Colectiva. La normativa aplicable en materia de huelgas no ha cambiado con respecto al segundo informe periódico de la República Eslovaca (párrs. 127 a 129)⁷.

⁶ E/C.12/SVK/2.

⁷ E/C.12/SVK/2.

Artículo 9

64. Toda la información relativa al seguro social, el seguro de accidentes, el seguro de garantía y el seguro de desempleo sigue siendo válida y está actualizada tal como se presentó en el tercer informe periódico de la República Eslovaca⁸. Los párrafos que siguen recogen exclusivamente nuevos datos e información correspondientes al período sobre el que se informa.

Seguro social en la situación de crisis causada por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) (para más detalles, véase el anexo)

65. Se adoptaron varias medidas para mitigar el impacto económico de la crisis de la COVID-19 en empleadores y trabajadores por cuenta propia, entre ellas el aplazamiento del vencimiento de las cotizaciones al seguro social y de las contribuciones obligatorias al ahorro para pensiones de jubilación para los empleadores y las personas trabajadoras por cuenta propia cuyos ingresos disminuyeron un 40 % o más como consecuencia de la crisis.

66. Se estableció que toda persona empleada tendría derecho a la prestación por enfermedad desde el primer día de la incapacidad temporal para el trabajo, lo que eximió a los empleadores del pago de la compensación de ingresos. Durante determinados períodos de cuarentena o aislamiento, se incrementó el importe de la prestación por enfermedad.

67. Se modificaron las condiciones para el pago de las prestaciones de cuidado (en los casos de cuarentena del hijo o de cierre del centro al que asiste) y de la prestación por accidente.

Seguro de enfermedad

68. La Ley del Seguro Social define el seguro de enfermedad como un seguro frente a la pérdida o reducción de ingresos derivada de la incapacidad temporal para el trabajo, el embarazo y la maternidad. El seguro de enfermedad cubre las siguientes prestaciones: la prestación por enfermedad, la prestación por cuidado (desde abril de 2021), la prestación compensatoria, la prestación por embarazo (desde abril de 2021) y la prestación de maternidad. La prestación por cuidado de larga duración tiene por objeto ayudar a las familias que atienden a una persona gravemente enferma a cubrir el período hasta que se conceda una prestación de cuidador. La prestación por embarazo está destinada a contribuir a sufragar los gastos adicionales asociados al embarazo (alimentación, vestimenta y otras necesidades básicas). Desde noviembre de 2022, el seguro de enfermedad incluye la denominada prestación de paternidad, que se concede a los padres durante dos semanas dentro de las seis semanas siguientes al nacimiento del hijo.

Seguro de desempleo en la situación de crisis causada por la COVID-19

69. Se adoptaron varias medidas específicas en el ámbito de las prestaciones por desempleo para mitigar el impacto económico de la crisis de la COVID-19 en la ciudadanía. Dado que las personas desempleadas tuvieron un acceso considerablemente más difícil al empleo, el período durante el cual podían percibir la prestación por desempleo se prorrogó en varias ocasiones, es decir, se amplió el denominado período de apoyo. En total, ese período se prorrogó cinco veces.

Seguro de pensiones

70. El sistema de pensiones se organiza en torno a un modelo de tres pilares. El primer pilar es obligatorio y se financia de manera continua. Participan en él todas las personas en edad de trabajar y sus empleadores, quienes abonan cotizaciones obligatorias al Instituto de Seguridad Social.

71. El seguro de jubilación comprende el seguro de vejez, que garantiza ingresos en la vejez y en caso de fallecimiento, y el seguro de invalidez, que protege frente a la pérdida de capacidad de obtener ingresos debido a una enfermedad prolongada y al fallecimiento.

⁸ E/C.12/SVK/3.

72. El sistema de prestaciones del seguro de pensiones ofrece protección frente a las consecuencias a largo plazo de determinados hechos sociales mediante prestaciones en efectivo cuando se produce una pérdida prolongada de ingresos. El régimen del seguro de vejez prevé la pensión de vejez, la pensión de jubilación anticipada, la pensión de viudedad para mujeres, la pensión de viudedad para hombres, la pensión de orfandad, la pensión parental (a partir del 1 de enero de 2023) y la 13ª pensión (a partir del 1 de julio de 2024).

73. El régimen del seguro de discapacidad prevé la pensión de discapacidad, la pensión de viudedad para mujeres, la pensión de viudedad para hombres, la pensión de orfandad y la 13ª pensión.

74. Desde la creación del seguro social se ha establecido la posibilidad de jubilarse de forma anticipada o diferida. La persona asegurada puede decidir cuándo jubilarse. Los pensionistas pueden trabajar sin restricciones y seguir recibiendo su pensión (con excepción de las pensiones de jubilación anticipada). Trabajar mientras perciben la pensión les permite aumentar progresivamente su cuantía. También vuelve a aplicarse la reducción de la edad de jubilación de los progenitores en función del número de hijos criados. Asimismo, desde enero de 2023 se permite la jubilación anticipada tras un mínimo de 40 años de servicio, con independencia de la edad de la persona asegurada. A partir del 15 de mayo de 2024, el período mínimo de servicio exigido se determina según el año de nacimiento de la persona asegurada.

75. El seguro de pensiones se ha ampliado para incluir la pensión parental. El pago de esta pensión hace efectivo el derecho constitucional de la persona asegurada a decidir que una parte de las cotizaciones efectuadas en el marco del sistema de seguridad material en la vejez se destine a quien la crió y recibe seguridad material en la vejez (la denominada “asignación de cotización”). Su cuantía asciende al 1,5 % de una doceava parte de la base de cotización del hijo.

76. El seguro de pensiones se amplió nuevamente en 2024. Tendrán derecho a la 13ª pensión, y a su pago, las personas beneficiarias de una prestación de pensión que, en diciembre del año correspondiente, tengan derecho al pago de una pensión de vejez, una pensión de jubilación anticipada, una pensión de discapacidad, una pensión de viudedad para mujeres, una pensión de viudedad para hombres, una pensión de orfandad o una pensión social. El importe de la 13ª pensión será de al menos 300 euros.

77. La Ley núm. 43/2004 de Ahorro para la Pensión de Vejez regula la capitalización obligatoria del denominado segundo pilar, administrado por entidades gestoras de pensiones. Este régimen, introducido en 2005, es de aportación definida y se financia mediante contribuciones a las cuentas personales de ahorro para la pensión. Del 18 % total de la tasa de cotización al seguro de vejez, el 4 % se destina al segundo pilar y el 14 % restante permanece en el Instituto de Seguridad Social.

78. El Estado también fomenta el ahorro voluntario para la jubilación mediante incentivos fiscales, que abarcan el ahorro complementario para pensiones y el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP). Las personas pueden reducir su base imponible con las contribuciones destinadas a este ahorro voluntario hasta un máximo de 180 euros anuales. El ahorro complementario para pensiones (tercer pilar) es obligatorio para quienes trabajan en puestos de alto riesgo y se financia con aportaciones de empleadores y empleados. Las contribuciones al ahorro complementario para pensiones que los empleadores realicen en nombre de los empleados participantes pueden deducirse fiscalmente hasta un 6 % del salario de dichas personas.

79. El PEPP, transferible entre los países de la UE, constituye otra modalidad de ahorro voluntario para la jubilación mediante productos de ahorro e inversión a largo plazo ofrecidos por diversas entidades financieras. Se financia exclusivamente con las aportaciones de los ahorradores, que no están vinculadas al empleo.

Artículo 10

80. La legislación sobre protección de la familia, protección de la maternidad y empleo de niños y adolescentes no ha cambiado con respecto al tercer informe periódico de la República Eslovaca.

81. En relación con el empleo de adolescentes, en especial de las jóvenes, se ha adoptado un Plan de Acción para el Empleo de las Mujeres, que establece tareas orientadas a crear programas de formación flexibles para jóvenes y programas de formación de segunda oportunidad. El Plan de Acción también contempla la prestación de orientación profesional específica en las escuelas y diversos programas de prácticas para jóvenes mujeres, en particular procedentes de comunidades romanés marginadas.

82. Con el fin de apoyar a las familias con hijos dependientes de corta edad, desde el 30 de mayo de 2023 se ha ampliado el ámbito del derecho a la prestación parental. También tendrá derecho la persona que cuide adecuadamente de un niño de entre 3 y 6 años que no haya sido admitido en una guardería pública correspondiente a su lugar de residencia. Esta prestación contribuye a sufragar los gastos de los centros privados y deja de percibirse cuando el niño es admitido en una guardería pública (esta información también sirve como respuesta a las cuestiones planteadas por el Comité en los párrafos 48 y 49 de sus observaciones finales, relativas a la educación preescolar).

83. El apoyo estatal a las familias se presta principalmente a través del sistema de prestaciones sociales estatales, que comprende las siguientes prestaciones, tanto puntuales como periódicas: la prestación por hijo a cargo, el complemento de la prestación por hijo a cargo, la prestación parental, la prestación para el cuidado del menor, la prestación por nacimiento, la prestación por parto múltiple, las prestaciones de apoyo al acogimiento familiar, la prestación por gastos funerarios y la prestación de manutención infantil.

84. La concesión de cada prestación está regulada por leyes específicas que establecen las condiciones de acceso, los importes y el procedimiento para su pago. Las condiciones de derecho se aplican del mismo modo a todas las personas solicitantes, sin posibilidad de excepción alguna. Desde 2019 se han introducido varias mejoras sustantivas en las prestaciones sociales estatales (además de los incrementos de cuantía), que se detallan en el anexo.

85. En Eslovaquia, el disfrute de la licencia parental está permitido hasta que el niño cumple 3 años (o hasta los 6 años si presenta un problema de salud crónico que requiere cuidados especiales) y la mayoría de las familias la consideran una prestación social que, además, permite a los padres que la utilizan mantenerse vinculados al entorno laboral.

86. La Ley núm. 380/2019 de Modificación del Código del Trabajo, en vigor desde el 1 de enero de 2020, amplió a cinco semanas la duración de la licencia básica también para las personas empleadas que aún no han cumplido 33 años pero se ocupan de manera permanente de un hijo. Esta modificación repercute positivamente en el matrimonio, la parentalidad y la vida familiar, así como en la crianza de los hijos, al aumentar el tiempo disponible para la vida en familia.

87. La Ley núm. 350/2022 de Modificación del Código del Trabajo, en vigor desde noviembre de 2022, también incorporó a la legislación nacional la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. Esta modificación introdujo la figura de la licencia de paternidad, reforzó la protección de los padres que la utilizan y estableció la posibilidad de solicitar modalidades flexibles de trabajo para atender a los hijos. Asimismo, añadió un nuevo párrafo al Código del Trabajo que permite a las mujeres y a los hombres que cuidan de manera permanente de un niño menor de 8 años solicitar trabajo a distancia, teletrabajo o trabajo desde el domicilio para facilitar su cuidado. El empleador está obligado a tramitar la solicitud.

88. Durante el período que abarca el informe se prestó especial atención a reforzar el acogimiento familiar en el marco del proceso de desinstitucionalización de las personas que antes estaban internadas en los antiguos centros de acogida para menores.

89. En enero de 2019 entró en vigor una modificación de la Ley núm. 627/2005 de Prestaciones para el Acogimiento Familiar, cuyo objetivo era mejorar el apoyo económico a los niños en acogimiento. El importe de la prestación periódica para el menor se ajustó al nivel de reembolso de los gastos correspondientes a un niño acogido por una familia profesional. También se amplió el grupo de personas con derecho a la prestación. Desde 2019, las prestaciones de apoyo al acogimiento familiar se incrementan en paralelo con la revalorización del mínimo vital.

90. A partir del 1 de agosto de 2021, el importe de la prestación única por hijo acogido se ajustó al mismo nivel que el subsidio por nacimiento (829,86 euros).

91. A partir del 1 de julio de 2022 se introdujeron dos nuevas prestaciones para apoyar el acogimiento familiar: la prestación para cubrir gastos adicionales del menor (de hasta 500 euros anuales) y la prestación para la formación de la persona acogedora (de hasta 100 euros anuales). Al mismo tiempo, se reajustó el importe de la prestación periódica especial para la persona acogedora (de 0,8 a 2,4 veces el mínimo vital correspondiente a un menor dependiente) y se incrementó y se escalonó la prestación periódica para la persona acogedora que atiende a un grupo de hermanos (de 1,39 veces a entre 0,975 y 5,8 veces, según el número de hermanos).

Artículo 11

Derecho a un nivel de vida adecuado

92. La información que figura a continuación también sirve como respuesta a las cuestiones planteadas por el Comité en los párrafos 26 y 27 —relativas a la lucha contra la pobreza— y 30 y 31 e) —relativas al derecho a una vivienda adecuada y la atención a las personas sin hogar— de sus observaciones finales.

93. En el ámbito de la pobreza y la exclusión social, el Gobierno aprobó en 2015 la Estrategia Marco Nacional para Fomentar la Inclusión Social y Combatir la Pobreza. Esta estrategia se evalúa periódicamente y se actualiza cuando procede. La última actualización fue aprobada por el Gobierno en noviembre de 2020, y en 2024 se estudiará la posibilidad de llevar a cabo una nueva evaluación y actualización.

94. Las políticas dirigidas a promover la inclusión social y combatir la pobreza tienen en cuenta los desafíos socioeconómicos actuales y de largo plazo, en particular las prioridades recogidas en la Declaración Programática del Gobierno y en el Programa Nacional de Reformas, así como las recomendaciones específicas formuladas por el Consejo de la Unión Europea en materia de inclusión social y lucha contra la pobreza y en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales. La evolución de la pobreza en Eslovaquia se supervisa de manera periódica mediante el informe anual sobre la situación social de la población.

95. El régimen de ingresos mínimos está regulado por la Ley núm. 417/2013 de Asistencia para Atender Necesidades Materiales. En 2023 se aprobaron varias modificaciones de esta ley que mejoraron la situación de los hogares en situación de necesidad material. Durante 2022 y 2023 se adoptaron diversas medidas de carácter inflacionario para apoyar a los hogares de bajos ingresos. También se adoptaron medidas destinadas a respaldar a los grupos más vulnerables en el contexto de la mitigación de los efectos de la pandemia de COVID-19.

96. El Estado no solo presta asistencia económica a los hogares en situación de necesidad, sino que también ofrece apoyo mediante servicios profesionales gratuitos, como la orientación familiar o el asesoramiento en materia de deudas, creados para ayudar a quienes atraviesan dificultades financieras.

97. En abril de 2023, mediante la Resolución núm. 158, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional para Prevenir y Poner Fin a la Falta de Hogar, que aborda distintos ámbitos —vivienda, salud, empleo, servicios sociales y protección social— asociados a la caída en la pobreza extrema que puede desembocar en la falta de hogar.

98. La Estrategia Nacional para Prevenir y Poner Fin a la Falta de Hogar incluye también un ámbito dedicado a los datos y estadísticas, que subraya la importancia de realizar un recuento de personas sin hogar, así como de medir la magnitud de la falta de hogar y los factores asociados, con el fin de diseñar intervenciones eficaces para poner fin a este fenómeno. Está previsto que esta medida forme parte del futuro plan de acción que se elaborará en el marco de la Estrategia.

Artículo 12

Derecho a la salud física y mental

99. En el marco de las políticas en materia de salud mental, se está llevando a cabo una reforma destinada a desarrollar la hasta ahora inexistente atención psiquiátrica comunitaria. El Ministerio de Salud ha elaborado y aprobado el Marco de Atención en Psiquiatría, el Marco de Atención en Psiquiatría Infantil y el Marco para la Humanización de la Atención Psiquiátrica en Régimen de Hospitalización. Están previstas dos reformas de mayor alcance: una reforma de la atención de salud y otra de la atención de salud mental. La reforma responde a la inaccesibilidad y la ineficacia de los servicios existentes, la falta de articulación con los servicios sociales y la escasez de profesionales.

100. Las áreas de reforma de la atención psiquiátrica en Eslovaquia se centran principalmente en la eliminación de cualquier tipo de estigma asociado a los trastornos mentales y la atención psiquiátrica; en la incorporación de nuevos servicios y en una mayor accesibilidad de la atención; en la articulación entre los servicios sanitarios y sociales y en la definición del itinerario asistencial del paciente tanto en atención ambulatoria como en régimen de hospitalización; en la introducción de nuevos enfoques para el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales; y en la modernización y humanización de la atención psiquiátrica.

101. La humanización de la atención psiquiátrica en régimen de hospitalización se está aplicando en la actualidad. Consiste en crear un entorno lo más natural posible, en el que la prestación de la atención sanitaria se base en la confianza mutua, el respeto, la dignidad y la cooperación entre el paciente y el personal sanitario. La humanización de la atención psiquiátrica en régimen de hospitalización implica modificar tanto el sistema de prestación de los servicios como el propio entorno asistencial, a fin de atender las necesidades de los pacientes respetando sus derechos. Este proceso transforma las condiciones de la hospitalización y tiene por objeto reducir los ingresos hospitalarios y avanzar hacia la desinstitucionalización de estas hospitalizaciones.

102. En marzo de 2023 entró en vigor la Ley núm. 495/2022, por la que se modifica tanto la Ley núm. 576/2004 de Atención Sanitaria y Servicios Relacionados con la Prestación de Atención Sanitaria como la Ley núm. 578/2004 de Proveedores de Atención de Salud, Trabajadores de la Salud y Organizaciones del Sector de la Salud (en adelante, la Ley núm. 495/2022). Esta ley define la naturaleza, las clases y los tipos de medidas de contención y establece las normas básicas para su utilización en los centros de atención sanitaria en régimen de internamiento, en consonancia con las recomendaciones dirigidas a la República Eslovaca por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes en esta materia.

103. La Ley núm. 495/2022 también introdujo una regulación uniforme de los derechos de los pacientes en los centros de atención de salud en régimen de internamiento en los ámbitos de la psiquiatría y la psiquiatría infantil, y estableció la obligación de que dichos centros elaboren los denominados “reglamentos internos”. Los detalles relativos al contenido de estos reglamentos están establecidos en una disposición jurídica de carácter general (Decreto núm. 143/2023 del Ministerio de Salud).

104. En el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, está previsto que para 2025 se establezca la atención psiquiátrica comunitaria mediante el aumento del número de unidades de hospitalización psiquiátrica —se construirán 15 nuevas unidades—, la creación de 11 centros psicosociales y 3 centros para el trastorno del espectro autista. Se ha constituido un grupo de trabajo de especialistas en el Ministerio de Salud encargado de elaborar un procedimiento operativo específico que regule la atención psiquiátrica comunitaria.

Artículo 13

Desarrollo del sistema escolar

105. En 2023 se aprobó un nuevo programa nacional de educación, que cumple todos los objetivos establecidos en el artículo 13, párrafo 1, del Pacto. Dichos objetivos también

figuran en la Ley núm. 245/2008 de Educación y Formación (en adelante, la Ley de Educación).

106. En la educación secundaria se han incorporado las competencias clave a los contenidos educativos de todos los niveles formativos —formación profesional secundaria básica, formación profesional secundaria, formación profesional secundaria completa y formación profesional superior—, de conformidad con la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.

107. Para el alumnado de primaria que haya concluido la escolaridad primaria en menos de nueve años o no haya superado satisfactoriamente el noveno curso, se ha creado la posibilidad de obtener la educación secundaria básica. Tras completar con éxito un curso de aprendizaje que proporciona formación profesional de nivel secundario básico, el alumno puede incorporarse al segundo año de un curso de aprendizaje que conduce a formación profesional de nivel secundario superior y, de este modo, mejorar sus cualificaciones y acceder al empleo.

108. La modificación de la Ley de Educación aprobada en 2021 permitió a estas personas completar su educación de diversas maneras.

109. Con efectos a partir del 1 de septiembre de 2021, se introdujo la educación preprimaria obligatoria para todos los niños que cumplan 5 años antes del 31 de agosto del año correspondiente. En la actualidad, más del 96 % de los niños cursan educación preprimaria obligatoria.

110. La Ley de Educación introdujo un nuevo principio en materia de crianza y educación: el derecho a ser admitido en la educación preprimaria en un centro de enseñanza preescolar a partir del curso escolar siguiente a aquel en que el niño cumpla 3 años. Para el curso 2024/25, solo podrá ser admitido en la educación preprimaria un niño que cumpla 4 años antes del 31 de agosto de 2024, de conformidad con la normativa vigente desde el 1 de septiembre de 2023.

111. A partir del 1 de enero de 2025 se implantará un nuevo método de financiación de los centros de enseñanza preescolar como instituciones de educación preprimaria. Este método se basará en que dichos centros reciban financiación en función de los costos reales necesarios para impartir una educación preprimaria de alta calidad, tanto en lo relativo al personal como al funcionamiento.

112. En el Plan de Acción para la Igualdad también se establecen objetivos estratégicos en el ámbito de la educación. Las tareas contemplan una mayor incorporación en los planes de estudio y en los materiales educativos de los temas relativos a los derechos humanos y las libertades fundamentales —el principio constitucional de igualdad y no discriminación, así como la prevención y eliminación de la violencia. Estos temas ya forman parte del plan de estudios de las escuelas de formación profesional de la Policía y de la Academia de Policía de Bratislava. Con el fin de eliminar los estereotipos en el sistema educativo, en el Plan de Acción para la Igualdad se prevén diversas actividades educativas.

Artículo 15

Derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico

113. El Ministerio de Cultura fomenta el acceso a la cultura mediante el establecimiento de la entrada gratuita en 33 museos y galerías. Desde octubre de 2022, la entrada gratuita se aplica el primer miércoles de cada mes (en lugar del domingo). Este cambio fue propuesto por los propios museos y galerías para estimular la asistencia de estudiantes y escolares como parte de su formación.

114. La modificación de la Ley núm. 189/2015 de Actividades Culturales y Educativas ha garantizado una financiación estable para todo el circuito de muestras y concursos que se desarrollan por fases sucesivas bajo la responsabilidad profesional del Centro Nacional de Educación y del Observatorio Central Eslovaco, desde el nivel regional hasta el nacional.

Cultura para los grupos desfavorecidos

115. Uno de los objetivos centrales de la Estrategia para la Cultura y la Industria Creativa en la República Eslovaca con miras 2030, aprobada en junio de 2023, es fomentar una cultura inclusiva. La intención es garantizar que la cultura sea accesible para todos y promover el desarrollo de sus distintas manifestaciones.

116. El Programa de Subvenciones para la Cultura de los Grupos Desfavorecidos asigna anualmente 980.000 euros para apoyar proyectos culturales en los ámbitos de la cultura en vivo, la edición y publicación, las publicaciones periódicas, la educación no formal, la supresión de barreras físicas y la supresión de barreras de acceso a la información. Las medidas de supresión de barreras físicas tienen por objeto promover la eliminación de obstáculos arquitectónicos y facilitar el acceso a la cultura de las personas con discapacidad.

117. El 23 de septiembre de 2020 tuvo lugar la ceremonia de firma de la Declaración sobre la Codificación de la Lengua de Señas Eslovaca, que desde 2018 forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de Eslovaquia.

118. El Ministerio de Cultura creó la Autoridad Eslovaca de Braille al ampliar, con efecto a partir del 15 de diciembre de 2020, la carta fundacional de la Biblioteca Eslovaca para Personas Ciegas Matej Hrebenda de Levoča. Con la creación de esta Autoridad, el Ministerio de Cultura contribuyó a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y dio cumplimiento a la recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

119. En 2024, el Ministerio de Cultura asignó fondos a la Biblioteca Eslovaca para Personas Ciegas Matej Hrebenda de Levoča para completar la creación de una unidad de la Autoridad Eslovaca de Braille dedicada a la transcripción de libros de texto y materiales didácticos a formatos accesibles para personas con deficiencias visuales o dificultades de lectura.

120. La Ley núm. 264/2022 de Servicios para los Medios de Información introdujo diversas modificaciones destinadas a mejorar la accesibilidad de los programas para las personas con deficiencias auditivas o visuales, entre ellas el aumento gradual del volumen de programas con acceso multimodal y el refuerzo de los requisitos de calidad aplicables a dicho acceso. La Ley prevé un incremento progresivo de la proporción mínima de programas con acceso multimodal a partir de enero de 2023, de modo que esa proporción mínima quede plenamente garantizada, a más tardar, en enero de 2027. En el anexo figura información detallada sobre los cambios introducidos por esta Ley.

121. En 2023 entró en vigor el sistema unificado de clasificación de contenidos, que establece siete descriptores (violencia, discriminación, miedo, adicción, sexo, lenguaje soez y desnudos) y define los criterios de inadecuación asociados a cada uno de ellos, con arreglo a los cuales se determina la adecuación por edades del contenido etiquetado. Su objetivo principal es reforzar la protección de los menores y ofrecerles mejor información sobre el contenido que podría no ser adecuado para ellos.

122. En el contexto de la guerra en Ucrania, la integración cultural de los migrantes se identificó como una de las prioridades del Programa de Subvenciones para la Cultura de los Grupos Desfavorecidos para 2022 y 2023.

123. En 2022 y 2023, el Ministerio de Cultura participó en un proyecto de investigación de la UNESCO sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial entre las comunidades, los grupos y las personas que abandonaron Ucrania a raíz del conflicto bélico y encontraron refugio en países vecinos: Hungría, Moldova, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Los resultados de la investigación sirvieron de base para elaborar una solicitud de asistencia internacional destinada a apoyar la preservación y el desarrollo del patrimonio ucraniano en los países de acogida, en consonancia con el Plan de Recuperación de Ucrania aprobado en julio de 2022.

Iglesias y comunidades religiosas

124. En 2021 se llevó a cabo un censo de población, viviendas y hogares, en el que el 68,6 % de la población declaró pertenecer a iglesias y comunidades religiosas registradas en Eslovaquia.

125. Eslovaquia ha adoptado un amplio marco normativo que regula de forma integral la relación entre el Estado y las iglesias. Desde 2020 está en vigor una nueva ley sobre el apoyo financiero a las actividades de las iglesias, fruto de varios años de diálogo entre el Estado y las confesiones religiosas. Esta ley garantiza la continuidad de su colaboración y establece normas claras y transparentes para la financiación de sus actividades, al tiempo que preserva la solidaridad con las iglesias más pequeñas.

Medios de comunicación

126. La Ley de Servicios para los Medios de Información establece un marco regulador integral en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual. El cambio más significativo es la inclusión de las plataformas de intercambio de videos en el régimen regulador de estos servicios. Además de los organismos de radiodifusión, los proveedores de servicios audiovisuales a petición, los operadores de retransmisión y los proveedores de servicios de multiplexación, la Ley también regula los derechos y obligaciones de los proveedores de plataformas de intercambio de videos y de los proveedores de servicios de contenido.

127. A partir de junio de 2025, esta Ley también regulará los derechos y obligaciones de los proveedores de servicios de acceso multimodal, entre los cuales figura la obligación de ofrecer una guía electrónica de programas fiable que proporcione información accesible para personas sordas y personas ciegas, así como la obligación de garantizar un acceso multimodal completo y de calidad adecuada. En la actualidad, el acceso multimodal está garantizado tanto en la radiodifusión televisiva como en los servicios audiovisuales a petición.

128. La obligación de cumplir los requisitos legales de protección de menores —en particular en lo relativo a la incitación al odio, la violencia o el terrorismo— también es aplicable a los proveedores de plataformas de intercambio de videos.

129. La nueva normativa mantiene el acceso del público a la información en la difusión de los servicios de programas y, además, garantiza el acceso a información plural, objetiva e imparcial, incluida aquella destinada a las minorías nacionales y a los grupos étnicos que residen en Eslovaquia.

130. En materia de pluralidad informativa y de transparencia sobre la estructura de propiedad y las relaciones de personal, se ha introducido la obligación de que todos los medios de comunicación —con independencia de que mantengan o no relaciones comerciales con el Estado— se inscriban como asociados del sector público. La puesta a disposición, en un registro público, de información sobre los propietarios finales de los medios de comunicación contribuirá a reforzar la transparencia en la titularidad mediática.

131. El Fondo Audiovisual concede financiación en forma de subvenciones, becas y préstamos para apoyar y desarrollar la cultura y la industria audiovisual. Desde 2016, también es posible solicitar apoyo financiero para la distribución de obras audiovisuales eslovacas, incluida la provisión de acceso multimodal a dichas obras.

Protección del derecho de autor

132. La legislación de la UE en materia de derechos de autor ha tratado de adaptarse a los avances tecnológicos y al desarrollo de las tecnologías digitales, lo que también ha motivado sucesivas modificaciones de la Ley núm. 185/2015 de Derechos de Autor desde 2019. Esta Ley constituye, por tanto, un marco jurídico integral para la regulación de los derechos de autor y de los derechos conexos en Eslovaquia. El nivel de protección se ajusta a las normas internacionales, europeas y regionales vigentes. En el anexo figura información detallada sobre esta normativa.

II. Información sobre el seguimiento de las observaciones finales (E/C.12/SVK/CO/3)

Información relativa a los párrafos 4 y 5

133. La Academia Judicial de la República Eslovaca, que cada año ofrece numerosas actividades formativas sobre diversas dimensiones de los derechos humanos, organizó varias sesiones de capacitación dedicadas, entre otras cuestiones, a la jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la protección de las víctimas de delitos y a la indemnización de las víctimas de la trata de personas, así como a la violencia doméstica y al abuso sexual. Se adjunta como anexo una lista de actividades formativas correspondientes al período sobre el que se informa.

Información relativa a los párrafos 6 y 7

134. La preparación de una reforma integral del Centro Nacional de Derechos Humanos de Eslovaquia, en calidad de institución nacional de derechos humanos y organismo de fomento de la igualdad, estará ligada al proceso de incorporación al ordenamiento interno de la legislación de la UE relativa a las normas aplicables a los organismos de igualdad y se ajustará a los Principios de París. La aprobación de las propuestas de directivas de la UE sobre este tema está prevista para 2024. En marzo de 2023 se aprobó una pequeña modificación relativa a la emisión de informes y recomendaciones independientes en el marco del informe núm. 4446/13/JUST de EU Pilot.

135. Se modificó el Reglamento del Consejo de Administración del Centro Nacional de Derechos Humanos de Eslovaquia para establecer la elección pública de su Dirección Ejecutiva, con efecto a partir del 1 de mayo de 2022.

136. Desde 2018, la financiación y el número de empleados del Centro Nacional de Derechos Humanos de Eslovaquia se han incrementado de manera gradual. En 2018, su presupuesto ascendía a 565.000 euros y contaba con 16 empleados, mientras que en 2023 el presupuesto alcanzó los 967.000 euros y la plantilla se amplió a 26 personas. Las cifras detalladas figuran en el anexo.

Información relativa a los párrafos 8 y 9

137. El Ministerio de Justicia elaboró un programa anticorrupción destinado a reforzar la prevención y la lucha contra la corrupción, es decir, a evitar la aparición de nuevas oportunidades de conducta corrupta mediante la detección de los riesgos y las causas de corrupción. La Política Anticorrupción de la República Eslovaca para 2019-2023 demuestra que la prevención resulta más sencilla y menos costosa que la detección, investigación y persecución de los actos de corrupción. En el anexo figura un cuadro con datos sobre el número de personas en casos concluidos mediante resolución judicial.

138. El Ministerio del Interior, además de adoptar medidas internas destinadas a prevenir la corrupción, trabaja activamente en la creación y el fomento de un entorno anticorrupción tanto para su personal funcionario como para su personal civil, lo que repercute positivamente en el público. De conformidad con la Política Anticorrupción de la República Eslovaca para 2019-2023, se ha establecido en el Ministerio la figura del coordinador de la lucha contra la corrupción y un sistema de gestión de riesgos de corrupción. En el anexo figura información adicional.

139. En el programa anticorrupción del Ministerio del Interior, los riesgos detectados se analizan en función de las condiciones específicas del propio Ministerio, con los siguientes objetivos: reducir el margen para la existencia y aparición de riesgos de corrupción, aumentar la sensibilización del personal y fortalecer su integridad, así como reforzar la integridad institucional.

140. Con miras a prevenir y combatir la corrupción, el Ministerio del Interior lleva a cabo actividades formativas sobre la notificación de casos de corrupción y la protección de los denunciantes. Asimismo, los miembros de la Fuerza de Policía reciben periódicamente formación de actualización en materia de prevención de la corrupción.

Información relativa a los párrafos 10 y 11

141. Eslovaquia ha reiterado su compromiso de destinar el 0,33 % de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de aquí a 2030. No obstante, pese a este compromiso, todavía no se ha elaborado un plan vinculante para alcanzar este objetivo, teniendo en cuenta la evolución del ingreso nacional bruto. En cualquier caso, el gasto ha ido aumentando de forma progresiva, prácticamente duplicándose desde 2014: pasó del 0,08 % del ingreso nacional bruto en 2014 al 0,15 % en 2022. Aun así, el cumplimiento del compromiso exige acelerar este ritmo de crecimiento, lo que será objeto de análisis y planificación en el marco de la nueva Estrategia de Asistencia Oficial para el Desarrollo a Medio Plazo para el período 2025-2030.

Información relativa a los párrafos 12 y 13

142. En 2023, el Ministerio de Justicia elaboró una versión preliminar de un proyecto de modificación de la Ley de Lucha contra la Discriminación, destinada a modificar la definición de ajustes razonables —incluida la consideración de la negativa a proporcionar dichos ajustes como una forma de discriminación por motivos de discapacidad— en los ámbitos contemplados por la propia Ley. No obstante, esta propuesta seguirá siendo objeto de debate.

143. No es posible modificar la Ley de Lucha contra la Discriminación para abarcar todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad, ya que dicha Ley solo regula cinco ámbitos concretos establecidos en ella: el empleo y las relaciones jurídicas afines, la seguridad social, la atención de la salud, la provisión de bienes y servicios y la educación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vincula la aplicación de los ajustes razonables al ejercicio o disfrute por las personas con discapacidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás, lo que implica que la obligación de garantizar estos ajustes queda amparada por la Constitución. De conformidad con la propia Constitución, la Convención forma parte del ordenamiento jurídico de la República Eslovaca y sus disposiciones son directamente aplicables.

144. En el marco de las iniciativas para mejorar la comunicación y la cooperación con la comunidad romaní, el Ministerio del Interior llevó a cabo con éxito un proyecto para crear puestos de agentes superiores de policía dedicados al trabajo comunitario. El objetivo era propiciar cambios en los asentamientos romaníes para que todos los residentes tuvieran un acceso igualitario a los servicios y actividades disponibles en la comunidad. Estos agentes, cuya aceptación por parte de la población romaní es esencial, participan en la resolución de los problemas que afectan a dicha comunidad en consonancia con las funciones policiales.

145. En lo que respecta a los solicitantes de asilo, la Ley núm. 480/2002 de Asilo establece que, dentro de los 15 días siguientes al inicio del procedimiento, todo solicitante debe recibir información sobre el proceso de asilo, en particular sobre sus derechos y obligaciones, los plazos aplicables, la posibilidad de contar con representación en el procedimiento y el acceso a asistencia jurídica. El Ministerio del Interior también debe facilitar al solicitante información sobre las organizaciones no gubernamentales que trabajan con solicitantes de asilo.

146. La Ley de Asilo dispone que el solicitante debe recibir asesoramiento psicológico, social o de otro tipo, así como un curso de orientación cultural adaptado a sus necesidades individuales; en el caso de un menor, también cuando resulte necesario para favorecer su desarrollo.

147. Asimismo, toda persona a quien se haya concedido asilo y toda persona extranjera que haya obtenido protección complementaria deben recibir asesoramiento social, psicológico o

de otro tipo, así como un curso de orientación cultural ajustado a sus necesidades individuales, durante un período de 12 meses a partir de la concesión del asilo o de la protección complementaria.

148. La Oficina de Migración del Ministerio del Interior proporciona a los solicitantes información sobre sus derechos y obligaciones, incluida la posibilidad de contar con representación y asistencia jurídica. En el marco de las sesiones de asesoramiento, se informa a los migrantes sobre sus derechos, las formas de discriminación a las que pueden enfrentarse y los mecanismos disponibles para responder ante posibles situaciones de discriminación.

149. Con respecto a la recomendación c), la Academia Judicial organiza la formación de los jueces y ofrece cada año diversas actividades de capacitación centradas en distintos aspectos de los derechos humanos, incluida formación sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2023 impartió una formación sobre determinadas cuestiones de la legislación de lucha contra la discriminación que se centró en el principio de igualdad de trato, los ámbitos y las formas de discriminación y la explicación de las denominadas medidas compensatorias temporales. Ese mismo año, la discriminación en las relaciones laborales también fue objeto de una actividad formativa específica.

150. Con respecto a la recomendación d), no se ha aprobado ningún plan de acción específico de prevención de todas las formas de discriminación para el período siguiente, dado que existen planes de acción sectoriales —por ejemplo, en materia de igualdad de género, lucha contra el racismo antirromaní y lucha contra el extremismo y la radicalización— que ya incorporan tareas específicas sobre estos ámbitos.

151. En el ámbito de la inclusión de la población romaní se aprobaron diversas modificaciones legislativas destinadas a eliminar situaciones de desventaja. La modificación de la Ley de Educación mediante la Ley núm. 182/2023 definió el concepto de necesidades educativas especiales, el concepto de segregación en la educación y la obligación de observar la prohibición de segregación en los procesos educativos.

Información relativa a los párrafos 14 y 15

152. Durante el período examinado, el Ministerio de Justicia presentó propuestas para mejorar la regulación de las relaciones jurídicas de las personas convivientes o allegadas, incluidas las parejas del mismo sexo.

153. El proyecto de ley sobre la declaración fiduciaria tenía por objeto simplificar la situación de las personas convivientes en lo relativo a sus derechos patrimoniales, respetando al mismo tiempo el matrimonio como una unión singular entre un hombre y una mujer. La mejora de la situación de las personas convivientes se refería, en particular, a su representación recíproca en asuntos ordinarios, la gestión de la herencia y la designación de un tutor en caso de restricción de la capacidad jurídica, así como al acceso a información sobre el estado de salud, incluida la información posterior al fallecimiento.

154. Otro proyecto de ley tenía por finalidad mejorar la situación de las personas allegadas, así como garantizar la continuidad en la gestión y el control del patrimonio y en el uso de sus rendimientos para el sostenimiento familiar. La propuesta pretendía reincorporar al ordenamiento instrumentos europeos ya consolidados, como los *trusts*, que permitirían a la ciudadanía gestionar sus bienes de manera eficaz. Sin embargo, estas iniciativas no contaron con el apoyo de la comunidad LGBTI, por lo que se retiraron.

Información relativa a los párrafos 16 y 17

155. Con miras a reforzar la eliminación de la discriminación estructural contra las personas con discapacidad, en abril de 2021 el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional para la Desinstitucionalización del Sistema de Servicios Sociales y de Acogimiento Familiar. En el marco de las tareas legislativas asociadas, se aprobó la Ley núm. 376/2022 de Progenitores de Acogida Profesionales, que contribuye de manera significativa al proceso de desinstitucionalización de los centros para niños y familias.

156. Los objetivos de la Estrategia Nacional para la Desinstitucionalización del Sistema de Servicios Sociales y de Acogimiento Familiar se concretan en medidas específicas en el documento sucesivo, el Plan de Acción Nacional para la Transición de la Atención Institucional a la Atención Comunitaria en el Sistema de Servicios Sociales (2022-2026). Las tareas que obligan a avanzar en la eliminación de la institucionalización en el ámbito de los servicios sociales también figuran en otros instrumentos estratégicos, como las Prioridades Nacionales para el Desarrollo de los Servicios Sociales (2021-2030) y el Programa Nacional para la Mejora de las Condiciones de Vida de las Personas con Discapacidad (2021-2030). Para más información sobre este tema, véase la sección correspondiente al artículo 2 del Pacto.

Información relativa a los párrafos 18 y 19

157. Eslovaquia aplica las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Eslovaquia⁹, aprobadas en mayo de 2023.

158. Durante el período sobre el que se informa, el Gobierno aprobó varios documentos estratégicos destinados a promover la igualdad entre mujeres y hombres. En abril de 2021 aprobó la nueva Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Igualdad de Oportunidades (2021-2027) y el Plan de Acción correspondiente. En enero de 2022 aprobó el Plan de Acción Nacional para la Prevención y la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (2022-2027). La Estrategia para la Igualdad y su Plan de Acción tienen continuidad en el Plan de Acción para el Empleo de las Mujeres. Las tareas derivadas de estos instrumentos se describen en las secciones correspondientes a los artículos 2 y 3 del Pacto.

Información relativa a los párrafos 20 y 21

159. Eslovaquia ha abordado todas las formas de desempleo con el fin de reducir progresivamente las disparidades regionales en el mercado de trabajo. Las medidas de apoyo al empleo adoptadas durante el período que abarca el informe se describen en la sección correspondiente al artículo 6 del Pacto.

160. Las personas a las que se concede protección internacional tienen derecho a trabajar desde el momento en que obtienen cualquiera de sus modalidades (asilo o protección complementaria). No necesitan permiso de trabajo y pueden ser empleadas en las mismas condiciones que las nacionales de la República Eslovaca. Así lo establece la Ley núm. 5/2004 de Servicios de Empleo.

161. El derecho de los solicitantes de protección internacional a celebrar una relación laboral está regulado en la Ley de Asilo. Conforme a esta disposición, la persona solicitante puede acceder al empleo una vez transcurridos seis meses desde el inicio del procedimiento.

162. El plazo se redujo de nueve a seis meses mediante la Ley núm. 124/2022 de Modificación de la Ley de Asilo. Esta enmienda entró en vigor el 1 de junio de 2022.

163. Esta normativa nacional es plenamente conforme con la legislación vigente de la UE y con la reforma en curso del Sistema Europeo Común de Asilo.

Información relativa a los párrafos 22 y 23

164. La información sobre las medidas adoptadas para promover la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación de género en el ámbito laboral en Eslovaquia figura en las secciones relativas a la aplicación del artículo 2 (párrs. 5 a 7), el artículo 3 y el artículo 7 del Pacto (párrs. 48 a 50 sobre salarios y condiciones de trabajo de las mujeres y párrs. 51 a 54 sobre igualdad de oportunidades en el empleo).

⁹ CEDAW/C/SVK/CO/7.

Información relativa a los párrafos 24 y 25

165. La Constitución garantiza el derecho de toda persona empleada a percibir una remuneración por el trabajo realizado que le permita disfrutar de un nivel de vida digno. Se garantiza un salario mínimo para todos los trabajadores, incluidos los poco cualificados y los nacionales de terceros países. El salario mínimo se incrementa cada año: pasó de 520 euros en 2012 a 750 euros en 2024, lo que representa un aumento del 44,23 %. Para más información sobre el salario mínimo en Eslovaquia, véase la sección correspondiente al artículo 7 del Pacto (párrs. 44 a 47).

166. Con respecto a la recomendación formulada en el párrafo 25 c), cabe señalar que, a fin de disponer de información sobre la actividad de las agencias de empleo y las agencias de trabajo temporal, la Ley de Servicios de Empleo impone a todas estas entidades la obligación de presentar informes anuales sobre sus actividades y de facilitar el control del cumplimiento de la legislación aplicable en materia de servicios de empleo.

167. Con respecto a la recomendación formulada en el párrafo 25 e), los sindicatos se constituyen con plena independencia del Estado. No se permite limitar el número de sindicatos ni favorecer a ninguno de ellos dentro de una empresa o sector. El derecho de sindicación está consagrado en la Constitución. De conformidad con el Código del Trabajo, la representación de las personas empleadas corresponde al órgano sindical competente, que representa a todas las personas empleadas de la entidad empleadora, y no solo a quienes estén afiliadas. El empleador tiene la obligación de permitir la actividad sindical en el lugar de trabajo. Para más información, véase la sección correspondiente al artículo 8 del Pacto.

Información relativa a los párrafos 26 y 27

168. Desde 2015, el Gobierno actualiza de manera continua la Estrategia Marco Nacional para Fomentar la Inclusión Social y Combatir la Pobreza. La Estrategia Nacional para Prevenir y Poner Fin a la Falta de Hogar, aprobada en 2023, también está al día en lo relativo a la lucha contra la pobreza.

169. Otra medida es el régimen de ingresos mínimos, regulado en la Ley núm. 417/2013 de Asistencia para Atender Necesidades Materiales. El Estado también ofrece servicios profesionales gratuitos —como orientación familiar o asesoramiento en materia de deudas— a los hogares en situación de necesidad. Información más detallada sobre ambos instrumentos y sobre la asistencia por necesidad material figura en la sección correspondiente al artículo 11 del Pacto.

170. El problema de la pobreza en las comunidades romaníes marginadas es atendido principalmente por la Oficina del Plenipotenciario del Gobierno para las Comunidades Romaníes, que actúa como órgano central de la administración estatal encargado de coordinar la inclusión de estas comunidades.

171. En el marco de la Estrategia de Igualdad, Inclusión y Participación de los Romaníes hasta 2030 y de sus planes de acción, se han publicado varias convocatorias de proyectos destinadas a mejorar la situación de la población romaní, algunas de las cuales se mencionan en los párrafos siguientes. Los detalles y los primeros resultados de varios de estos proyectos (párrs. 172 y 177 a 182) figuran en el anexo.

172. La convocatoria de la primera fase del Proyecto Nacional de Equipos de Desarrollo (2023), con un presupuesto asignado de 69,6 millones de euros, tiene por objeto promover la integración socioeconómica y mejorar las condiciones de vida de las comunidades marginadas, como los romaníes. La convocatoria está dirigida tanto a los municipios como a las comunidades romaníes residentes en ellos. El proyecto abarcará 60 municipios incluidos en el Atlas de las Comunidades Romaníes, para los que se prepararán convocatorias sectoriales en los ámbitos de la vivienda, la salud pública, la educación y el empleo.

173. Este proyecto se complementará con la convocatoria Asistencia a los Gobiernos Locales en la Gestión de Proyectos, cuyo objetivo es apoyar a los municipios en la preparación, gestión y evaluación de proyectos financiados por la UE. Posteriormente, se prevé publicar una convocatoria específica (dotada con 5 millones de euros) destinada a

preparar a desempleados de larga duración para su incorporación al mercado laboral y a prestar apoyo a las empresas en la contratación de personas romaníes.

174. Desde el último examen (2014-2020), se han destinado fondos del Programa Operativo de Recursos Humanos a combatir la pobreza en los asentamientos de las comunidades romaníes marginadas, centrándose en su integración y en la mejora del equipamiento técnico de dichos asentamientos. La asignación total superó los 190 millones de euros, financiando 446 proyectos en total (231 de los cuales siguen en ejecución).

175. Se asignaron más de 195 millones de euros a proyectos nacionales gestionados por la Oficina del Plenipotenciario del Gobierno para las Comunidades Romaníes y a proyectos bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud (comunidades saludables).

176. Casi 63 millones de euros se destinaron a proyectos de demanda. Se apoyaron iniciativas para crear patrullas ciudadanas locales, el programa Regiones en Progreso —orientado a impulsar el crecimiento y la innovación regional—, acciones para eliminar los obstáculos al mejor aprovechamiento de los fondos de la UE y aumentar su impacto, así como proyectos de mentoría y tutoría.

177. Continuó la ejecución del Proyecto Nacional para la Inclusión de Niños de Comunidades Romaníes Marginadas en Centros de Educación Preescolar. Uno de sus resultados concretos es que 9.048 niños de estas comunidades han completado al menos un año de educación preescolar, y ha aumentado el número de niños romaníes que acceden a la educación ordinaria. En el anexo se detallan otros resultados específicos de la segunda fase de este proyecto (2020-2023).

178. El Proyecto Nacional de Trabajo Social sobre el Terreno y Trabajo sobre el Terreno en Municipios con Comunidades Romaníes Marginadas (2020-2023) se centró en la promoción del desarrollo sostenible, la reintegración social y la mejora de las condiciones de vida. Al 31 de julio de 2023, el proyecto comprendía 168 municipios y empleaba 274 trabajadores sociales sobre el terreno y 278 trabajadores sobre el terreno. Las intervenciones abarcaron esferas como el empleo, la vivienda, las finanzas y la gestión, los fenómenos sociopatológicos y la educación. El proyecto se amplió posteriormente a 44 municipios adicionales.

179. El Proyecto Nacional de Apoyo y Mejora de la Calidad del Trabajo Social sobre el Terreno (2019-2023), bajo la responsabilidad del Organismo de Implementación del Ministerio de Trabajo, se llevó a cabo a través de 200 entidades de comunidades romaníes marginadas y 4 ONG que trabajan con personas sin hogar. El proyecto proporcionó formación especializada al personal sobre el terreno para mejorar la calidad de su labor con los usuarios, y también ofreció apoyo para obtener un título universitario o completar la educación secundaria. La evaluación del proyecto se publicó en 2023.

180. El Proyecto Nacional de Creación de Capacidades Profesionales a Nivel Comunitario (2019-2023), ejecutado por el Organismo de Implementación del Ministerio de Trabajo, tenía por objeto reforzar las capacidades profesionales de los proveedores de servicios sociales de intervención en situaciones de crisis a nivel comunitario. Hasta julio de 2023, 94 proveedores habían recibido apoyo, con un total de 581 trabajadores contratados (incluidos responsables técnicos, profesionales especializados, trabajadores comunitarios y personal de centros comunitarios).

181. La combinación de los proyectos de trabajo social sobre el terreno y trabajo comunitario, bajo la responsabilidad de la Oficina del Plenipotenciario del Gobierno para las Comunidades Romaníes y del Organismo de Implementación del Ministerio de Trabajo, se plasmó en el Proyecto Nacional de Trabajo Social y Comunitario sobre el Terreno, a cargo del Ministerio de Trabajo para el período 2023-2029. Su objetivo es apoyar a las personas que afrontan situaciones de vida difíciles y reforzar su inclusión social. Los centros comunitarios buscan promover el desarrollo de las comunidades —especialmente en los asentamientos romaníes— mediante el uso estratégico de los recursos comunitarios.

182. El Proyecto Nacional de Servicios Comunitarios en Ciudades y Pueblos con Presencia de Comunidades Romaníes Marginadas (2021-2023) se centró en servicios de intervención en situaciones de crisis prestados en los centros comunitarios. Los servicios prestados incluyeron asesoramiento social especializado, apoyo en el ejercicio de derechos e intereses

legalmente protegidos, actividades de prevención, actividades de ocio, asistencia en la preparación escolar y apoyo a la educación no formal. El trabajo realizado con personas adultas de comunidades romaníes marginadas contribuyó a un aumento del empleo.

183. Los proyectos financiados con cargo al Programa Operativo de Recursos Humanos también se orientaron a inversiones en las infraestructuras de los asentamientos donde viven comunidades romaníes marginadas, en particular en los ámbitos de la vivienda, el acceso a servicios básicos, el suministro de agua potable, la construcción de carreteras y el establecimiento de sistemas municipales de gestión de residuos. Asimismo, se apoyó la construcción o rehabilitación de centros de educación preescolar, escuelas primarias y centros comunitarios.

Información relativa a los párrafos 28 y 29

184. Con respecto a la recomendación formulada en el párrafo 29 b), en 2019 el Consejo Nacional de la República Eslovaca pidió al Gobierno que no prosiguiera el proceso de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Pese a la no ratificación, la República Eslovaca lleva a cabo actividades en el ámbito de la protección de las mujeres. La Directiva de la Unión Europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, que persigue objetivos similares a los del Convenio de Estambul, se incorporará al ordenamiento jurídico eslovaco a más tardar en 2027.

185. La prevención y la eliminación de la violencia de género contra las mujeres se abordan mediante el Plan de Acción Nacional para la Prevención y la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (2022-2027), aprobado por el Gobierno en 2022. En él se establecen medidas en cuatro ámbitos estratégicos: la protección de las mujeres que sufren violencia y de sus hijos; la prevención de la violencia contra las mujeres; las políticas integradas y la recopilación de datos; y la sanción efectiva de la violencia contra las mujeres.

186. El Plan de Acción para la Igualdad, que da seguimiento a la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Igualdad de Oportunidades (2021-2027), también incluye diversas medidas para prevenir y eliminar la violencia. Se trata, principalmente, de tareas relacionadas con el seguimiento de la situación y la mejora de las intervenciones dirigidas en casos de expulsión. Otras tareas se orientan a una persecución y sanción más adecuadas de los autores, mediante la formación de los profesionales encargados de hacer cumplir la ley y la identificación de vías para mejorar la legislación y la práctica eslovacas en materia de protección de las mujeres contra la violencia.

187. El Proyecto de Prevención y Eliminación de la Discriminación de Género tuvo por finalidad establecer un sistema de protección y apoyo integrados para las víctimas de la violencia de género y armonizar los esfuerzos destinados a reducirla y prevenirla. Para ello, el proyecto articuló diversos procedimientos y medidas, tanto legislativas como no legislativas, con el objetivo común de asegurar actuaciones coordinadas para prevenir o reducir la violencia de género, seguidas de un apoyo y una protección efectivos para las personas que la han sufrido.

188. La policía presta la debida atención a todos los casos denunciados de violencia contra las mujeres, incluida la protección de las personas en riesgo. Una medida importante es la facultad de los agentes de policía para expulsar a la persona violenta de la vivienda compartida con la persona amenazada y de su entorno inmediato, de conformidad con la Ley núm. 171/1993 de las Fuerzas de Policía. En 2021, el plazo de expulsión de la vivienda compartida se amplió de 10 a 14 días y el alcance territorial de la prohibición de aproximación a la persona en riesgo se amplió de 10 a 50 metros.

189. La protección de las víctimas de la violencia contra las mujeres y de la violencia doméstica también se vincula a proyectos destinados a crear salas de interrogatorio especiales para niños que han sido víctimas de delitos y para otras víctimas de delitos que son especialmente vulnerables, así como a la formación de agentes de policía para trabajar con estas víctimas. El objetivo de dichas salas es evitar el contacto directo entre la víctima y el

agresor durante el interrogatorio y reducir las experiencias negativas asociadas al entorno policial ordinario.

190. En 2023 concluyó el proyecto denominado “Salas de interrogatorio especiales para niños que han sido víctimas de delitos y para otras víctimas de delitos que son especialmente vulnerables”. En el marco del proyecto se construyeron 15 salas especiales de interrogatorio, una de las cuales, situada en la Academia de Policía de Bratislava, se utiliza también con fines docentes.

191. En el marco del proyecto denominado “Mejora de la protección de los derechos de las víctimas: reforzar las capacidades y los procedimientos para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”, concluido en abril de 2024, la red de salas especiales de interrogatorio se amplió con ocho salas adicionales.

192. En el marco de un proyecto independiente se habilitaron dos salas especiales de interrogatorio para la toma de declaración de víctimas de la trata de personas.

193. La acreditación de las organizaciones de apoyo a las víctimas corresponde al Ministerio de Justicia, que también garantiza el registro de la denominación “centro de intervención” para las organizaciones acreditadas. Desde enero de 2022 se han establecido centros de intervención para víctimas de violencia doméstica, con un centro en cada región, salvo en la región de Košice, donde existen tres.

194. Los centros de intervención para víctimas de violencia doméstica son organizaciones que obtienen la acreditación tras demostrar que han cumplido la condición de tener cinco años de experiencia en la prestación de asistencia a víctimas de ese tipo. Actúan como primer punto de contacto tras la expulsión de la persona violenta de la vivienda compartida y pueden garantizar asistencia necesaria e inmediata para todas las víctimas. Una víctima puede acudir a un centro de intervención incluso sin que se haya producido la expulsión, y el centro presta la asistencia profesional necesaria (no es necesario presentar una denuncia penal ni que se haya abierto un procedimiento penal).

195. La principal función de los centros de intervención es prestar asistencia profesional de forma proactiva a las víctimas de violencia doméstica, poniéndose en contacto con ellas dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de una copia del acta de expulsión. Además, intervienen en situaciones de crisis, evalúan la amenaza de peligro para la vida o la salud (evaluación de riesgos), prestan asistencia jurídica y psicológica, facilitan el acceso a servicios sociales de alojamiento de emergencia y a asesoramiento social especializado, y mantienen un enfoque coordinado en la prestación de asistencia.

196. Los centros de intervención prestan asistencia gratuita a las víctimas de violencia doméstica. El Ministerio de Justicia proporciona apoyo financiero para, como mínimo, un centro de intervención en cada región. El importe estimado de la subvención destinada al conjunto de los centros de intervención asciende a 1,6 millones de euros anuales.

197. Los centros de intervención recopilan datos sobre el número de mujeres, niños y hombres víctimas de violencia doméstica que reciben asistencia profesional. En 2022 prestaron ayuda y apoyo a 1.375 mujeres y en 2023 a 1.930 mujeres.

Información relativa a los párrafos 30 y 31

198. La Estrategia de Igualdad, Inclusión y Participación de los Romaníes hasta 2030, cuya aplicación coordina la Oficina del Plenipotenciario del Gobierno para las Comunidades Romaníes, constituye un documento clave para mejorar la situación de la vivienda de la población romaní, al establecer las tareas en este ámbito. El Plan de Acción para la Vivienda aprobado en el marco de dicha estrategia incluye más de 50 medidas concretas.

199. La responsabilidad principal de acceder a una vivienda propia recae en la persona. Los objetivos y prioridades de la política estatal de vivienda se definen en el documento marco Política de Vivienda de la República Eslovaca hasta 2030, aprobado por el Gobierno en 2021. El objetivo a largo plazo es aumentar progresivamente el nivel general de la vivienda para que sea asequible y para que todos los hogares puedan conseguir una vivienda adecuada.

No obstante, como ya se indicó, la política estatal de vivienda no aborda específicamente la vivienda de la población romaní.

200. En relación con las recomendaciones formuladas en el párrafo 31 b) y c), el Estado establece instrumentos y condiciones legislativas para que los municipios desarrollen políticas locales de vivienda inclusivas. Sin embargo, la utilización de los instrumentos existentes depende enteramente de cada municipio. Entre las cuestiones que dependen exclusivamente de los municipios figuran, entre otras, la respuesta a las necesidades de vivienda o alojamiento, así como la decisión sobre los planes de planificación territorial y el desarrollo de su propio territorio, lo que incluye la ubicación de nuevas construcciones, también de vivienda social en régimen de alquiler.

201. Con respecto a la recomendación que figura en el párrafo 31 d), Eslovaquia ha configurado un sistema de instrumentos de apoyo económico al desarrollo de la vivienda, de conformidad con los objetivos de la política estatal de vivienda. Mediante la combinación de subvenciones previstas en la Ley núm. 443/2010 de Subvenciones a la Promoción Inmobiliaria y al Fomento de la Vivienda Social, y un préstamo en condiciones favorables del Fondo Estatal de Desarrollo de la Vivienda, se garantiza desde hace largo tiempo un sistema de apoyo para la adquisición de viviendas en alquiler destinadas a vivienda social de titularidad municipal. Desde el inicio del programa en 1998 hasta la fecha, este mecanismo ha respaldado la adquisición de más de 48.000 viviendas públicas de alquiler. Corresponde a las autoridades locales decidir si desean promover este tipo de construcción.

202. La Ley núm. 200/2021 de Planificación Territorial introdujo la obligación de que los planes urbanísticos municipales y urbanos protejan unas condiciones de vida saludables, incluidas condiciones espaciales suficientes para la vivienda, teniendo en cuenta a las personas desfavorecidas o vulnerables, como las que viven en zonas segregadas donde se concentra la pobreza y esta se reproduce de generación en generación. Se trata de una medida específica dirigida a las comunidades romaníes marginadas.

203. La Ley núm. 201/2022 de Construcción introdujo la figura jurídica de la certificación de edificación de los inmuebles romaníes construidos entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de marzo de 2024 sin permiso de edificación ni la notificación correspondiente y situados en un lugar segregado caracterizado por pobreza concentrada y reproducida de generación en generación. La certificación solo se expide si se presenta una prueba de titularidad, una prueba de uso del inmueble con fines residenciales y una prueba de que el inmueble no pone en peligro la vida ni está situado en un lugar inadecuado (por ejemplo, bajo una línea eléctrica). Al mismo tiempo, la Ley introdujo una ficción jurídica de permisibilidad para los inmuebles construidos antes de 1989: se considera que los inmuebles cuentan con autorización si se utilizan de forma continuada para el fin al que están destinados y si el propietario del inmueble es el propietario del terreno en el que está construido o está en proceso de regularizar su relación con dicho terreno. Estos dos procedimientos son aplicables a los inmuebles de todos los ciudadanos.

204. Parte de las respuestas a las recomendaciones relativas a la población romaní se exponen en los párrafos 171 a 174 y 183 de la sección relativa a los párrafos 26 y 27. Las prácticas descritas, incluidas la certificación adicional de edificación en comunidades romaníes marginadas y la ficción jurídica de permisibilidad para determinados inmuebles, generan obstáculos frente a los desalojos forzosos. En casos de desalojos forzosos, la Oficina del Plenipotenciario del Gobierno para las Comunidades Romaníes emprende actuaciones jurídicas ante las autoridades competentes cuando la actuación presenta indicios de incumplimiento de la ley o se ejecuta en contravención de las normas derivadas de convenios internacionales y de las recomendaciones correspondientes. En esos supuestos, remite el asunto a la Fiscalía General y, asimismo, pone en contacto a las personas romaníes con las oficinas del Centro de Asistencia Jurídica.

205. La Oficina del Plenipotenciario del Gobierno para las Comunidades Romaníes concede subvenciones para apoyar las necesidades sociales y culturales y la búsqueda de soluciones a situaciones especialmente desfavorables de la comunidad romaní, así como para respaldar la adquisición de viviendas municipales mediante un sistema participativo de base comunitaria, que es eficiente, sostenible, se basa en los méritos y ahorra recursos públicos.

Asimismo, la Ley núm. 201/2022 de Construcción regula la construcción de la propia vivienda de modo que también pueda aplicarse en un sistema de subvenciones.

206. En relación con las recomendaciones formuladas en el párrafo 31 a), b) y d), cabe mencionar la concesión en 2023 de una subvención de 380.000 euros para la construcción de viviendas alternativas para comunidades romaníes marginadas en el municipio de Telgárt. De manera similar, entre 2022 y 2023 se concedió una subvención para facilitar vivienda de sustitución a familias romaníes cuyas viviendas se encontraban en terrenos afectados por la construcción de una autopista en el tramo Zelený Most–Svrčinovec, pese a que solo una de las construcciones originales contaba con permiso de construcción. El Gobierno aprobó esta solución, incluida la concesión de la subvención, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de desalojos forzosos.

207. Desde 2024, la Oficina del Plenipotenciario del Gobierno para las Comunidades Romaníes ejecuta un nuevo proyecto nacional destinado a apoyar a los municipios con presencia de comunidades romaníes marginadas en la regularización de la situación jurídica de los terrenos sobre los que se asientan los asentamientos. En el marco de este proyecto ya se ha contactado con 800 municipios, y la Oficina, en cooperación con el Ministerio del Interior, también está en proceso de reforzar la capacidad técnica de las oficinas de distrito para llevar a cabo con rapidez procedimientos simplificados de regularización de la propiedad de la tierra en los asentamientos romaníes.

208. Desde abril de 2023 entraron en vigor nuevas disposiciones del Código de Ejecución para los desalojos y desalojos de inmuebles, con especial atención a la vivienda o el alojamiento alternativos. En 2017 y en 2022-2023 se modificó la Ley núm. 7/2005 de Quiebra y Reestructuración y, con el fin de proteger a la persona deudora, se establecieron el valor inembargable de la vivienda del deudor, el mecanismo de inmuebles de mayor y menor valor y una regulación específica que fija las condiciones en las que la vivienda del deudor no puede convertirse en dinero.

209. Con respecto a la recomendación que figura en el párrafo 31 e), en la sección correspondiente al artículo 11 del Pacto (párrs. 97 y 98) se ofrece información adicional sobre la Estrategia Nacional para Prevenir y Poner Fin a la Falta de Hogar aprobada por el Gobierno.

Información relativa a los párrafos 33 y 34

210. En el marco del Programa Eslovaquia 2021-2027, dentro del objetivo específico “Apoyo al acceso al agua y a la gestión sostenible del agua”, se han asignado fondos de la Unión Europea, bajo la competencia del Ministerio de Medio Ambiente, por un importe superior a 139 millones de euros, destinados a garantizar el suministro de agua potable a la población y a rehabilitar las infraestructuras de abastecimiento de agua potable. Asimismo, bajo la responsabilidad de la Oficina del Gobierno, se ha previsto una asignación específica de 7 millones de euros para garantizar el acceso de las comunidades romaníes marginadas al agua potable.

211. En 2023 se apoyaron ocho proyectos mediante subvenciones gestionadas por la Oficina del Gobierno, cuyo objetivo era garantizar el acceso al agua destinada al consumo humano, en algunos casos mediante la conexión a redes de abastecimiento de agua y alcantarillado, por un importe total de 100.500 euros.

212. En el marco del Programa Operativo de Recursos Humanos, durante el período que abarca el informe se abrieron dos convocatorias: una destinada a apoyar el acceso al agua potable y otra orientada a completar las infraestructuras básicas en comunidades romaníes marginadas, anunciada en 2020. En el marco de estas convocatorias se aprobaron 59 proyectos por un importe superior a 8 millones de euros, algunos de los cuales se encuentran actualmente en fase de finalización.

Información relativa a los párrafos 35 y 36

213. En 2023, el Ministerio de Salud actualizó y simplificó la convocatoria de apoyo a la apertura de nuevas consultas de medicina general en regiones con escasez de servicios. Las modificaciones propuestas se coordinaron con las regiones autónomas y, paralelamente, se actualizó la lista de distritos con déficit de personal médico y las asignaciones correspondientes. La convocatoria se revisa anualmente con el fin de responder de forma flexible a las necesidades reales de nuevos médicos en cada región.

214. La medida financiada con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia tiene por objetivo reforzar la capacidad necesaria de la red pública mínima de atención ambulatoria general en los distritos con escasez, mediante el apoyo a la creación de nuevos centros de atención ambulatoria. La ayuda está destinada principalmente a compensar los costos asociados a la puesta en marcha y al funcionamiento inicial de estos centros.

215. Con el fin de estabilizar la atención pediátrica ambulatoria y garantizar el funcionamiento de los servicios de urgencias pediátricas, el Ministerio de Salud ajustó la localización de los puntos fijos de los servicios de urgencias ambulatorias para niños y adolescentes. El objetivo fue concentrar al personal médico en equipos funcionales y situarlos más cerca de los hospitales, a fin de facilitar el acceso a pruebas de laboratorio, métodos de diagnóstico por imagen y atención hospitalaria de seguimiento.

216. El Ministerio de Salud publicó en su sitio web información sobre todos los proyectos de inversión ejecutados en el marco de dos convocatorias destinadas a apoyar la construcción y reconstrucción de hospitales, con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia de la atención hospitalaria. En total, se ejecutaron 7 proyectos de gran envergadura y 15 proyectos de menor escala.

217. Para cada proyecto se definió un plan de ejecución y se estableció un sistema de seguimiento del progreso basado en un esquema de “semáforo”. Este sistema se concibió como un instrumento de comunicación transparente con el público, que permite supervisar el estado de las actividades de cada proyecto —si se han completado, están en curso sin retraso, presentan retrasos o se encuentran en riesgo.

218. En agosto de 2023, el Ministerio de Salud anunció la convocatoria “Nueva Red Hospitalaria – Mejora de la calidad y la eficiencia de la atención hospitalaria – Reposición de equipamiento hospitalario”, financiada con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia, que prevé una financiación del 100 % para la adquisición de dispositivos y equipamiento médicos modernos.

219. A partir del año académico 2024/25, las facultades de medicina del país admitirán 150 estudiantes adicionales. Esta medida constituye el primer paso para cumplir el compromiso del Gobierno de aumentar el número de estudiantes nacionales en determinados programas y ámbitos de la educación superior.

Información relativa a los párrafos 37 y 38

220. En enero de 2022, el Gobierno aprobó la actualización del Programa Nacional de Promoción de la Salud para 2021-2030, elaborado sobre la base de las políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo principal de esta actualización es mejorar el estado de salud de la población mediante el aumento de la concienciación sanitaria, con especial atención a la alimentación y la nutrición, la actividad física, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, la promoción de la salud mental y las condiciones de trabajo y de vida. Otro objetivo es fomentar estilos de vida más saludables entre la población y mantener la aplicación de medidas de prevención frente a las enfermedades infecciosas, al menos en el mismo nivel que en la actualidad.

221. En enero de 2022, el Gobierno aprobó el Plan de Acción Nacional sobre los Problemas Relacionados con el Alcohol (2021-2030), basado en la Estrategia Mundial para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol de la OMS. El Plan tiene por objeto aumentar la concienciación sanitaria sobre la magnitud y la naturaleza de los efectos sanitarios, sociales y económicos

del consumo nocivo de alcohol, así como reducir los efectos negativos del consumo en los distintos grupos destinatarios.

222. En junio de 2024, el Gobierno aprobó el Plan de Acción Nacional para la Promoción de la Actividad Física para (2024-2030), basado en el Programa Nacional de Promoción de la Salud actualizado (2021-2030) y en las Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud de la OMS. Su objetivo es mejorar el nivel de salud pública mediante la promoción de la actividad física y contribuir a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Uno de los objetivos principales es reducir en un 5 % la prevalencia de la inactividad física entre adultos y adolescentes de aquí a 2030.

223. El sector de la salud pública responde de manera oportuna a las recomendaciones del Comité relativas a la adopción de medidas legislativas sobre la comercialización y venta de bebidas y alimentos cuya composición —en particular el contenido de azúcares, grasas y estimulantes— puede resultar perjudicial para la salud de niños y jóvenes. Una medida concreta en este ámbito es la aprobación del nuevo Decreto núm. 75/2023 del Ministerio de Salud, relativo a los requisitos aplicables a los establecimientos destinados a niños y jóvenes.

Información relativa a los párrafos 39 y 40

224. En marzo de 2023 entró en vigor la Ley núm. 495/2022, que regula la definición y los tipos de medios de contención, así como las normas marco para su utilización en centros de salud institucionales, en consonancia con las recomendaciones formuladas a la República Eslovaca por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT). El uso de camas protectoras (camas con red) como medida restrictiva está permitido únicamente hasta el 31 de diciembre de 2024. De conformidad con la Estrategia para la Eliminación de las Camas con Red elaborada por el Ministerio de Salud, de un total de 205 camas de este tipo, 39 habían sido retiradas a marzo de 2024 y las 166 restantes se eliminarán antes del 31 de diciembre de 2024.

225. El 15 de septiembre de 2023 entró en vigor el Decreto núm. 358/2023 del Ministerio de Salud, por el que se establecen disposiciones detalladas sobre el uso de medios de contención y sobre el mantenimiento de un registro de dichos medios.

226. En diciembre de 2022 se constituyó en el seno del Ministerio de Salud un grupo de trabajo del Ministro sobre los medios de contención y sus alternativas en el ámbito de la psiquiatría, incluida la psiquiatría infantil, que actualmente está elaborando un documento destinado a describir las denominadas alternativas a las camas protectoras.

227. Se ha elaborado un programa de formación continua titulado “Normas mínimas para un programa de formación continua en la gestión de la agresividad y los trastornos del comportamiento en psiquiatría”, dirigido a médicos, personal de enfermería, personal médico auxiliar, auxiliares de enfermería, psicólogos, personal de ambulancias y paramédicos. El programa comenzará a impartirse a partir de septiembre de 2024.

228. Desde 2024, el Ministerio de Salud, en cooperación con el Centro Nacional de Derechos Humanos de Eslovaquia, imparte formación a los profesionales de la salud mental en materia de derechos humanos de los pacientes y uso de medios de contención, de conformidad con las normas y recomendaciones del CPT.

Información relativa a los párrafos 41, 42 y 43

229. Durante el período que abarca el informe, no se aprobaron leyes destinadas a cubrir de forma generalizada todos los costos asociados al aborto legal, incluidos el aborto libre y los anticonceptivos modernos para prevenir embarazos no deseados, en el marco del seguro público de salud.

230. Los Estados miembros de la UE tienen competencia para decidir sobre los precios y el reembolso de los medicamentos cubiertos por el seguro público de salud, dentro del ámbito de sus competencias nacionales. La República Eslovaca seguirá ejerciendo estas competencias como parte integrante de su sistema nacional de salud. La legislación eslovaca

otorga prioridad al derecho a la protección de la salud y a la igualdad de acceso a una atención sanitaria asequible y de calidad para toda la población, respetando al mismo tiempo todos los aspectos de derechos humanos establecidos en los tratados internacionales.

231. El seguro público de salud reembolsa íntegramente las intervenciones médicas de interrupción del embarazo realizadas por razones médicas previstas en una normativa específica. Las interrupciones del embarazo que no se efectúan por motivos médicos no están cubiertas por el seguro público de salud.

232. Los anticonceptivos destinados a prevenir embarazos no deseados no están cubiertos por el seguro público de salud. En Eslovaquia existe una dificultad para calificar como anticonceptivo un producto cuyo efecto principal es provocar un aborto. La anticoncepción se entiende esencialmente como la prevención de la concepción.

233. La anticoncepción no se considera una prestación de atención de salud. En este sentido, no se ha producido ningún cambio legislativo. A pesar de que en las asociaciones profesionales del sector médico se ha alcanzado un consenso sobre los cambios solicitados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, no se ha logrado un consenso político al respecto.

234. Aún no se ha aprobado un programa nacional integral para la protección de la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos, debido a la falta de consenso social sobre esta cuestión. No obstante, la protección, preservación y recuperación de la salud de las mujeres y de las madres constituye una prioridad para el Ministerio de Salud, que elabora constantemente nuevas propuestas para el desarrollo de la atención sanitaria destinadas a fomentar la salud reproductiva de las mujeres y la maternidad sin riesgo.

235. Con el fin de promover la salud sexual y reproductiva, el Ministerio de Salud participa en un proyecto desarrollado junto con la Oficina Regional para Europa de la OMS, titulado “Promoción de la salud sexual y reproductiva mediante diagnósticos y métodos de tecnología procreativa natural y medicina reproductiva restaurativa”, centrado en la introducción de nuevos enfoques para el tratamiento de la infertilidad.

236. El Ministerio de Salud ha establecido un instrumento eficaz para promover un enfoque de atención respetuoso e igualitario hacia madres y recién nacidos, en colaboración activa con todos los hospitales de maternidad, conforme a los criterios de la Iniciativa “Hospitales amigos del niño” de la OMS.

237. Actualmente, el Ministerio de Salud está desarrollando un proyecto piloto destinado a crear un nuevo sistema multidisciplinario de intervención y apoyo en situaciones de crisis para la madre o la persona progenitora, por ejemplo, en los casos de muerte fetal, o cuando se detectan riesgos para el desarrollo del niño o se establece un diagnóstico médico que indica una condición de salud desfavorable.

238. Las principales tareas, programas y actividades orientados a la protección y promoción de la salud sexual y reproductiva se recogen en diversos documentos, en particular en el Marco de Atención Sanitaria en Ginecología y Obstetricia, directrices profesionales y documentos no legislativos como estrategias y planes de acción, entre ellos el Plan de Igualdad de Género (2020-2024), la Estrategia Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Igualdad de Oportunidades (2021-2027) y su correspondiente Plan de Acción, la Estrategia de Igualdad, Inclusión y Participación de los Romaníes hasta 2030, la Garantía Europea para la Infancia, la Estrategia Nacional de Apoyo a la Familia y la Demografía, y el Programa Nacional para la Mejora de las Condiciones de Vida de las Personas con Discapacidad (2021–2030).

239. El desarrollo de la atención sanitaria centrada en la salud reproductiva de las mujeres y en una maternidad sin riesgo también se refleja en la normativa interna del Ministerio de Salud (véase el anexo).

240. Respecto de la aplicación de la recomendación formulada en el párrafo 42 c), y de conformidad con la Ley de Educación, el Ministerio de Salud elabora los planes de estudios nacionales de las enseñanzas sanitarias que preparan al alumnado para las profesiones de la salud en los centros de enseñanza secundaria sanitaria del país. La formación profesional de

ámbito estatal incorpora contenidos relativos a la educación sexual, la salud sexual y reproductiva y la educación para la vida en pareja y la parentalidad.

241. A lo largo de sus estudios, el alumnado recibe formación sobre el uso de métodos anticonceptivos, los riesgos del embarazo a edades tempranas y las enfermedades de transmisión sexual, en el marco de diversas asignaturas profesionales. Los planes de estudios y programas de las asignaturas sanitarias de las universidades y escuelas superiores también incluyen contenidos relativos a la salud sexual y reproductiva.

242. En el ámbito de la formación continua de los profesionales de la salud, el Ministerio de Salud establece normas mínimas para los programas de especialización, certificación y formación permanente. Estas normas incluyen, en su contenido teórico, conocimientos específicos sobre cuestiones sexuales en la relación entre el personal sanitario y el paciente, en el contexto de la prestación de atención sanitaria. En 2019 se aprobó una nueva norma mínima para el programa de especialización en sexología dirigido a la profesión médica.

243. A partir de 2021, Regiones Saludables, organización dependiente del Ministerio de Salud, en cooperación con la entidad InTYMYta, elaboró y puso en marcha programas de formación en salud sexual y reproductiva dirigidos a comunidades romaníes marginadas. El objetivo fue capacitar a 246 asistentes para llevar a cabo intervenciones y actividades educativas en dichas comunidades. Los resultados confirman que estas personas promotoras de la salud están contribuyendo a cambios positivos, especialmente en las 246 localidades en las que opera Regiones Saludables.

244. La recomendación que figura en el párrafo 42 f) se aplica mediante el nuevo plan de estudios nacional aprobado en 2023, que concede mayor importancia a la capacidad del alumnado para desarrollar conocimientos y aplicarlos en la práctica. En la asignatura “Ser humano y naturaleza”, el alumnado estudia los contenidos relativos al organismo y a la herencia y variabilidad, con especial atención al cuerpo humano, los procesos vitales, la herencia y la diversidad humana.

Información relativa a los párrafos 44 y 45

245. El Programa de Eslovaquia también tiene por finalidad mejorar el acceso equitativo y oportuno a servicios de calidad, sostenibles y asequibles, incluidos los servicios de salud; modernizar los sistemas de protección social, con especial atención a la infancia y los grupos desfavorecidos; y mejorar la accesibilidad, especialmente para las personas con discapacidad. En este contexto, se apoya la formación continua del personal sanitario, por ejemplo en los servicios de ginecología, obstetricia y neonatología, en consonancia con los principios de la Iniciativa “Hospitales amigos del niño”, y se presta apoyo para la realización de auditorías clínicas.

246. El Ministerio de Salud ha elaborado un proyecto denominado “Apoyo a la formación del personal sanitario en el fomento de la lactancia materna, el vínculo relacional y la realización de auditorías clínicas en el marco de la Iniciativa ‘Hospitales amigos del niño’ (2024-2029)”. Entre sus objetivos figuran comprobar que no se discrimina a las personas progenitoras —ya sean romaníes, refugiadas o con discapacidad— y realizar auditorías clínicas sobre la aplicación de los principios de dicha iniciativa.

247. Con respecto a la recomendación formulada en el párrafo 45 b), en 2003 el Ministerio de Salud creó un grupo de trabajo compuesto por expertos en la materia, con el objetivo de esclarecer los hechos relacionados con las esterilizaciones ilegales en el territorio de la República Eslovaca. El grupo identificó deficiencias de procedimiento, lo que llevó al Gobierno a emprender una revisión de la legislación sanitaria pertinente para armonizarla con la legislación de la UE y las obligaciones internacionales.

248. El consentimiento informado está consagrado en la Ley de Atención Sanitaria desde 2004. Esta establece la obligación del personal sanitario de proporcionar información clara y sin presiones sobre la finalidad, la naturaleza, las consecuencias y los riesgos de toda prestación de atención sanitaria. El paciente debe poder tomar la decisión de manera autónoma, disponer de tiempo suficiente para ello, contar con la madurez de juicio necesaria y encontrarse en condiciones médicas adecuadas.

249. Los profesionales de la salud reciben formación sobre los métodos adecuados para obtener el consentimiento libre e informado de las mujeres que se someten a procedimientos de esterilización, de conformidad con la Ley de Atención Sanitaria.

250. La formación del personal sanitario en salud reproductiva y educación sexual —incluidos la esterilización y otros métodos anticonceptivos—, así como en los aspectos jurídicos de la prestación de atención sanitaria, teniendo en cuenta la necesidad de obtener el consentimiento informado y la orientación correspondiente, forma parte de los planes de estudio de las profesiones sanitarias de medicina, enfermería, enfermería de obstetricia y enfermería especializada.

251. Además, todo profesional de la salud está obligado a cumplir el Código de Ética establecido por la Ley núm. 578/2004 de Proveedores de Atención de Salud, Trabajadores de la Salud y Organizaciones del Sector de la Salud.

252. La esterilización ilícita está tipificada como delito en el artículo 159 del Código Penal y puede castigarse con una pena de hasta 15 años de prisión cuando cause lesiones corporales graves o la muerte de la persona afectada. El Código Penal también sanciona la falsificación de historiales médicos. En consecuencia, el profesional sanitario que practique una esterilización sin el consentimiento libre, pleno e informado incurre en responsabilidad penal. Durante el período que abarca el informe no se registraron en el país casos de esterilización forzada.

253. Todos los casos pasados de esterilización forzada de mujeres romaníes han sido debidamente investigados por las fuerzas del orden. No se dispone de información sobre la aparición de nuevos casos. En caso de que se produjeran nuevos supuestos de esterilización forzada, cualquier persona puede dirigirse a las autoridades competentes y presentar una denuncia penal ante la policía o la fiscalía.

254. En noviembre de 2021, el Gobierno presentó disculpas oficiales a las mujeres que habían sido sometidas a esterilización de forma contraria a derecho. El Gobierno se disculpó por los casos de esterilización y por las violaciones de los derechos humanos cometidas —en particular contra mujeres romaníes— durante los períodos 1966-1989 y 1990-2004, calificando esas prácticas como inaceptables y contrarias a los derechos humanos.

255. Con respecto a la recomendación formulada en el párrafo 45 c), en marzo de 2023 el Ministerio de Justicia presentó una propuesta legislativa para la elaboración de una ley sobre la indemnización de las mujeres esterilizadas de forma contraria a derecho. Asimismo, en abril de 2023, un diputado presentó un proyecto de ley ante el Consejo Nacional para que se concediera una indemnización económica a esas mujeres¹⁰ (para más detalles, véase el anexo).

256. Debido a la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas en 2023, dicha propuesta no llegó a debatirse. Posteriormente ese mismo año se debatió una propuesta similar, pero no fue aprobada.

Información relativa a los párrafos 46 y 47

257. También tienen derecho al reembolso de la atención sanitaria de urgencia los extranjeros que no estén asegurados en el sistema público eslovaco o que no estén cubiertos por el seguro de otro Estado miembro y los extranjeros a quienes se haya concedido protección temporal en Eslovaquia.

258. El Ministerio de Salud está facultado para definir los procedimientos médicos reembolsables que exceden la atención sanitaria de urgencia, información que se publica en su sitio web. El reembolso de medicamentos, dispositivos médicos y suplementos alimenticios se rige por la lista vigente de productos clasificados. En caso de establecerse un copago, este corre a cargo de la persona a la que el producto esté prescrito.

¹⁰ Véase también CAT/C/SVK/FCO/4.

259. Sobre la base de lo anterior, el Ministerio de Salud publica en su sitio web el alcance de los procedimientos médicos reembolsables más allá de la atención sanitaria de urgencia.

260. Asimismo, el Ministerio de Salud de la República Eslovaca publica en su sitio web el alcance de la atención sanitaria prestada más allá de la atención de urgencia, de conformidad con la Ley núm. 577/2004, relativa al alcance de la atención sanitaria reembolsada en el marco del seguro público de salud y sobre el reembolso de los servicios relacionados con la prestación de atención sanitaria. En concreto, desde enero de 2023 esta ley regula el alcance de la atención sanitaria para los niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 18 años y 364 días a quienes se haya concedido protección temporal en relación con el conflicto armado en Ucrania, y desde el 1 de septiembre de 2023, también para los adultos.

Información relativa a los párrafos 48 y 49

261. De conformidad con la Estrategia de Igualdad, Inclusión y Participación de los Romaníes hasta 2030 y su correspondiente plan de acción en materia de educación, el Ministerio de Educación, Investigación, Desarrollo y Juventud (en adelante, el Ministerio de Educación) anunció en 2023 la convocatoria titulada “Apoyo a la prestación de atención e intervención tempranas a niños de 0 a 6 años de comunidades romaníes marginadas y de entornos marcados por la pobreza intergeneracional”. Se hace hincapié en la incorporación de personas de la propia comunidad, que conocen el idioma y las condiciones locales, para que actúen como asistentes de primera infancia. El fortalecimiento de la alfabetización en lectura y de las habilidades parentales de las madres también incrementará su confianza y su determinación para incorporarse al mercado de trabajo tras la licencia parental (véanse las cifras concretas en el anexo).

262. La modificación de la Ley de Educación, de 9 de mayo de 2023, por la que se introdujo un nuevo principio en materia de educación y crianza —el derecho a ser admitido en educación preprimaria en un centro de enseñanza preescolar a partir de los 3 años— contribuirá también a la inclusión de los niños romaníes. Asimismo, garantizará un número suficiente de plazas en los centros de enseñanza preescolar, tanto mediante la propia modificación legislativa como a través de la convocatoria para ampliar su capacidad en 9.107 plazas de aquí a 2026.

263. Se ha introducido la educación preprimaria obligatoria para todos los niños de 5 años, con independencia de su contexto socioeconómico familiar. La capacidad de los centros de enseñanza preescolar se incrementó de manera sustancial y se hizo posible que la educación preprimaria obligatoria se impartiera también en otros establecimientos de educación preprimaria, además de los centros de enseñanza preescolar. La tasa bruta de matriculación de niños de 5 años ha superado el 96 %.

264. Otra medida consiste en reconocer, como principio de educación y formación, el derecho del niño a ser admitido en un centro de enseñanza preescolar a partir de los 4 años y, posteriormente, a partir de los 3 (aplicable desde septiembre de 2024 a todos los niños que hayan cumplido 4 años a 31 de agosto de 2024). Corresponde a los progenitores decidir si solicitan la admisión del niño en un centro de enseñanza preescolar público desde los 4 años o si ejercen ese derecho, a su discreción, en un centro privado o confesional.

265. A fin de que este derecho pueda ejercerse en favor del mayor número posible de niños, se está ampliando la capacidad existente de los centros de enseñanza preescolar, con el objetivo de que la tasa de matriculación de los niños de 3 a 4 años en un centro de enseñanza preescolar de calidad alcance progresivamente el 90 %, y la de los niños de 5 años en adelante sea de al menos el 95 %.

266. Con respecto a la recomendación formulada en el párrafo 49 b), la licencia parental hasta que el niño cumpla 3 años es percibida por la gran mayoría de las familias en Eslovaquia como una prestación social importante, que además permite que los progenitores en licencia parental se mantengan vinculados al ámbito laboral, al menos mediante trabajo a tiempo parcial. Hay aproximadamente 3.300 niños menores de 3 años matriculados en guarderías y casi 8.800 niños menores de 2 años matriculados en centros de enseñanza preescolar.

267. La recomendación que figura en el párrafo 49 c) se cumple en varios documentos aprobados que afectan al proceso educativo en las escuelas primarias. Por ejemplo, la Ley de Educación establece que “el objetivo de la educación es permitir que el niño o el alumno adquiera y refuerce el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y por los principios establecidos en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”.

268. En los Criterios de Evaluación de las Publicaciones Educativas en el marco del Programa Estatal de Educación para la Enseñanza Primaria (2023), uno de los criterios es el criterio ético según el cual “las publicaciones educativas no fomentan estereotipos ni prejuicios y no son discriminatorias”.

269. En el Plan de Estudios Nacional de 2023, en la sección relativa a la alfabetización cívica e intercultural, el marco actitudinal consiste en “trabajar conscientemente con los propios estereotipos y prejuicios”, y el marco procedimental en “contribuir a la creación de un entorno inclusivo y aplicar el principio de igualdad, respetando el contexto social y económico, el estado de salud, la pertenencia étnica, cultural o religiosa, el origen, la visión del mundo, el género, la autopercepción, la identidad u otras características”. Esta cuestión también se aborda en la asignatura “Persona y sociedad”, en el marco de la educación cívica, como parte de la temática “igualdad y justicia”.

Información relativa a los párrafos 50 y 51

270. El Instituto de Investigación de Psicología Infantil y Patopsicología, adscrito al Ministerio de Educación ha elaborado procedimientos profesionales y diagnósticos orientados a niños y jóvenes romaníes, y también lleva a cabo actividades formativas en el ámbito de los psicodiagnósticos innovadores y la aplicación de un sistema de medidas de apoyo en el contexto del diagnóstico de menores procedentes de comunidades romaníes marginadas. Estas actividades tienen por finalidad contribuir a reducir los diagnósticos erróneos y, con ello, su derivación a centros de educación especial.

271. Para promover la inclusión de todo el alumnado, el Ministerio de Educación introdujo, mediante legislación aplicable a partir del año escolar 2023/24, un sistema de medidas de apoyo. Se dispone de numerosas medidas para prevenir y eliminar la segregación no deseada, como actividades destinadas a favorecer la adquisición de competencias escolares, mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje del alumnado procedente de entornos socialmente desfavorecidos, promover la inclusión social, prevenir el abandono escolar, impartir cursos de idiomas o garantizar la figura del asistente pedagógico.

272. En mayo de 2023 se incorporó a la Ley de Educación la definición de segregación. El Ministerio de Educación elaboró la Guía metodológica sobre la eliminación de la segregación en la educación y la formación, que ofrece orientaciones a los centros educativos para abordar situaciones de riesgo de segregación según los distintos tipos de localidades con concentración de población romaní. El seguimiento del riesgo de segregación tiene por objeto evaluar los indicios y riesgos de segregación en el ámbito educativo.

273. La Estrategia de Igualdad, Inclusión y Participación de los Romaníes hasta 2030 y su correspondiente plan de acción en materia de educación incluyen asimismo la tarea de garantizar una evaluación objetiva y que tenga en cuenta los aspectos culturales de las necesidades educativas individuales de los niños procedentes de comunidades romaníes marginadas. La educación preprimaria, en la que estos niños pueden adquirir el eslovaco como segunda lengua, contribuye también a reducir la sobrerrepresentación de niños romaníes en la educación especial.

274. La Oficina del Plenipotenciario del Gobierno para las Comunidades Romaníes ha coordinado varias convocatorias de proyectos orientadas también a apoyar la educación de niños pertenecientes a comunidades romaníes marginadas. Algunos de esos proyectos se describen en los párrafos 172 y 177 a 183 de la sección sobre información de seguimiento relativa a los párrafos 26 y 27 de las observaciones finales.

275. Con respecto a la recomendación formulada en el párr. 51 b), las convocatorias de la primera fase del Proyecto Nacional de Equipos de Desarrollo, orientado a apoyar la

integración socioeconómica de las comunidades marginadas, pueden involucrar a municipios concretos, mientras que el proyecto aporta cooperación y apoyo a los municipios y las comunidades romaníes que residen en ellos. Los proyectos deben respaldar el desarrollo integral de las comunidades, incluida la educación (para más información, véanse el párr. 172 y el anexo).

276. La cooperación con las autoridades locales, a la que se hace referencia en la recomendación formulada en el párrafo 51 b), también se llevó a cabo mediante las dos fases del Proyecto Nacional para la Inclusión de Niños de Comunidades Romaníes Marginadas en Centros de Educación Preescolar, y los resultados positivos confirman que la ejecución de proyectos en el marco de estos programas creó las condiciones para reducir la derivación de niños romaníes fuera del sistema educativo ordinario hacia el denominado sistema de educación especial (para más información, véanse el párr. 177 y el anexo).

277. En relación con la recomendación que figura en el párrafo 51 d), el Ministerio del Interior actúa como coordinador en materia de prevención del delito, con especial atención también al extremismo, y coordina asimismo la prestación de asistencia a las víctimas de delitos. Lleva a cabo actividades de sensibilización mediante acciones preventivas y educativas. Con arreglo a la Ley núm. 583/2008 de Prevención de la Delincuencia y Otras Actividades Antisociales, se han creado oficinas de información para mejorar el apoyo y la asistencia a las víctimas de delitos y su protección. Estas oficinas realizan además actividades educativas de prevención dirigidas a jóvenes y personas de primer contacto en los centros escolares.

278. En el marco de las actividades de sensibilización, el Ministerio del Interior ha elaborado varios folletos sobre la lucha contra el extremismo, entre ellos uno titulado “Radicalización y extremismo violento: manual para profesionales de primera línea”, así como otros materiales vinculados a la radicalización, por ejemplo “Ciberacoso”, “Discurso de odio” y “Omisión de denuncia y prevención de delitos”.

Información relativa a los párrafos 52 y 53

279. Una medida decisiva para garantizar el acceso a una educación inclusiva ha sido la incorporación de medidas de apoyo en la legislación y su aplicación en la práctica. Estas medidas constituyen un sistema de asistencia y apoyo integral para niños y adolescentes (desde las guarderías hasta la escuela secundaria), basado en el mérito. La aplicación de medidas de apoyo individualizadas a cada niño —incluidos los niños con discapacidad— mejora sus oportunidades educativas dentro del sistema ordinario.

280. En el marco del Plan de Largo Plazo de Actividades Educativas, de Investigación, de Desarrollo, Artísticas y Otras Actividades Creativas del Sector de la Educación Superior (2023-2028), aprobado por el Gobierno en 2023, se propusieron varias medidas (para más detalles, véase el anexo):

281. Modificar el enfoque relativo al alumnado con necesidades específicas, sustituyendo una categorización horizontal basada en la desventaja por un enfoque centrado en estudiantes que afrontan barreras para el aprendizaje y el acceso a la educación y que requieren medidas de apoyo para desarrollar su potencial, incluida su identificación.

282. Elaborar un catálogo de medidas de apoyo para el período 2024-2026, necesarias para superar los obstáculos en la vida académica y no académica del estudiantado de educación superior.

283. Aprobar una Estrategia para ampliar las capacidades profesionales destinadas a la provisión de medidas de apoyo (2024-2025) para estudiantes universitarios.

Información relativa a los párrafos 54 y 55

284. En seguimiento de la Declaración Programática del Gobierno para el período 2023-2027, el Ministerio de Educación está trabajando en un proyecto de orientación profesional. Tras analizar el nivel de prestación de los servicios de orientación, se definirán

medidas de apoyo para el período siguiente y se procurará garantizar una orientación accesible para todo el alumnado. Paralelamente, se está preparando la introducción de un sistema de microcertificaciones, con el fin de favorecer un aprendizaje más flexible y orientado a competencias.

285. Desde 2018 está en curso una reforma del sistema de acreditación de las instituciones de educación superior. El Organismo de Acreditación para la Educación Superior de Eslovaquia asumió estas funciones a partir de enero de 2020. Ello conllevó la transición a nuevos criterios de acreditación: normas para el sistema interno, para los programas de estudio y para los procedimientos de habilitación e inauguración. Se obligó a todas las universidades a armonizar su sistema interno con estas normas. El ajuste se realizó en 2022 y la evaluación de las universidades continuó durante 2023.

286. El nuevo sistema de acreditación implica una mayor participación de las partes interesadas —incluidos los empleadores— en los procesos de elaboración, aprobación y evaluación de los programas de estudio. Las titulaciones deberán responder a las expectativas profesionales específicas de cada sector. Los planes de estudio indicarán las ocupaciones para las que se requiere la cualificación correspondiente, lo que deberá ser validado por las partes externas pertinentes, incluidos los empleadores.

Información relativa a los párrafos 56 y 57

287. En 2021, el Gobierno aprobó el Marco Conceptual de Lucha contra la Radicalización y el Extremismo hasta 2024 y, sobre esa base, se elaboraron el informe de seguimiento sobre la situación del extremismo en la República Eslovaca correspondiente al período 2020-2021 y la actualización de las tareas previstas en dicho marco.

288. El Marco Conceptual de Lucha contra la Radicalización y el Extremismo tiene por objetivo promover el respeto de los valores universales y prevenir la aparición de prejuicios, estereotipos y discursos de odio motivados por la intolerancia nacional, racial, étnica, religiosa o de otra índole, así como prevenir la aparición y difusión de actitudes y actividades orientadas a apoyar y promover el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en una sociedad democrática.

289. El documento define tareas como la realización anual de encuestas sobre la situación y la evolución de la radicalización, el extremismo y el discurso de odio, y sobre la percepción subjetiva de seguridad de la población; la información al público acerca de influencias negativas en Internet y redes sociales que pueden radicalizar a los jóvenes; y la formación de funcionarios públicos en materia de asistencia a las víctimas del extremismo y la violencia de espectadores.

290. En 2023 se elaboraron dos metodologías sobre radicalización y extremismo que establecen principios generales para reforzar la resiliencia de los centros educativos: “Radicalización de niños y jóvenes” y “Ataques armados en escuelas y entornos escolares”.

291. Con respecto a la recomendación formulada en el párrafo 57 b), el Fondo para la Promoción de la Cultura de las Minorías Nacionales aporta recursos financieros para apoyar actividades destinadas a garantizar el diálogo y el entendimiento interculturales, así como la preservación, la protección y el desarrollo de la identidad y los valores culturales de las minorías nacionales. Las subvenciones y becas del Fondo respaldan la ejecución de proyectos multiculturales e interétnicos dirigidos a, al menos, dos minorías nacionales.

292. El Ministerio de Justicia publica cada año una convocatoria para la promoción de los derechos humanos y, durante el período 2019-2024, se apoyaron varios proyectos centrados en reforzar el respeto, combatir el discurso de odio y el extremismo, prevenir la radicalización y el extremismo, promover el diálogo entre minorías y mayoría, y sensibilizar sobre el Holocausto, en particular sobre el Holocausto romaní. Los solicitantes pueden optar a subvenciones de entre 5.000 y 50.000 euros. La dotación total habitual de este programa de subvenciones es de 769.500 euros. En el anexo figura una lista ilustrativa de los proyectos financiados.

293. En el marco de la aplicación de la recomendación que figura en el párrafo 57 c), la República Eslovaca participa en el proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa INSCHOOL (2021-2027) sobre escuelas inclusivas para los niños romaníes, cuyo objetivo es promover la inclusión social de la población romaní mediante el apoyo a políticas y prácticas de educación inclusiva en Bulgaria, Chequia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y el Reino Unido. El Ministerio de Educación participó en la reunión de expertos en educación inclusiva titulada “Normas y herramientas europeas para una educación inclusiva y de calidad”. En el marco del proyecto Programa de Formación (2023-2024), se celebró una serie de actividades en las que especialistas eslovacos pudieron debatir cuestiones relativas al desarrollo de políticas educativas orientadas a apoyar al alumnado procedente de entornos desfavorecidos.

294. En 2023, el Ministerio del Interior, en cooperación con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), impartió formación al personal de las oficinas de información sobre los delitos de odio, con especial atención a la aplicación de un enfoque sensible y respetuoso hacia las víctimas. El objetivo fue reforzar los conocimientos y las competencias del personal para que pueda identificar a las víctimas de delitos de odio y prestarles asistencia y apoyo adecuados.

295. Desde 2020, el Ministerio del Interior, a través de sus oficinas de información, organiza dos veces al año reuniones de las plataformas regionales de asistencia a las víctimas de delitos. Durante el período que abarca el informe, estas reuniones abordaron también, entre otros temas, los discursos de odio en relación con el antisemitismo, la prevención de la desinformación, la radicalización —con la participación del Centro Nacional de Derechos Humanos de Eslovaquia—, la radicalización en la juventud y el ciberacoso.

296. El Ministerio del Interior incorporó la cuestión de la retórica antirromaní, contraria a las minorías y de otra índole discriminatoria, xenófoba y extremista en la Estrategia de Prevención de la Delincuencia y Otras Actividades Antisociales hasta 2028, en el marco de los objetivos estratégicos “Crear un entorno adecuado para la educación, la formación y el ocio de la infancia y la juventud” e “Incrementar la protección de los espacios públicos y la sensación de seguridad”.

297. Respecto de la recomendación que figura en el párrafo 57 d) de las observaciones finales, en 2021 el Gobierno aprobó la Estrategia de Igualdad, Inclusión y Participación de los Romaníes hasta 2030. En ella se define la orientación de las políticas públicas en materia de igualdad e inclusión de la población romaní. Se concede especial importancia a la no discriminación, al refuerzo de la lucha contra el racismo antirromaní y al aumento de la protección de los grupos y las personas más vulnerables.

298. En virtud de la Ley de Servicios para los Medios de Información, de 2022, todo servicio de contenidos prestado por un organismo de radiodifusión o por un proveedor de servicios audiovisuales a petición debe respetar la dignidad humana; en particular, no debe promover la violencia ni incitar a la violencia o al odio, ni desprestigiar o denigrar —de manera manifiesta o encubierta— por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o creencias, opinión política o de otra índole, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual, nacimiento, origen nacional o social, características genéticas, nacionalidad o pertenencia a una minoría nacional o a un grupo étnico. Asimismo, los proveedores de plataformas de intercambio de videos están obligados a adoptar medidas adecuadas para proteger al público frente a programas, videos generados por usuarios y comunicaciones comerciales audiovisuales que contengan los contenidos perjudiciales mencionados. Además, ninguna comunicación comercial en los medios puede contener o promover discriminación por ningún motivo. El incumplimiento puede dar lugar a la imposición de sanciones.

299. Durante el período objeto del informe, el organismo público de radiodifusión —Radio y Televisión de Eslovaquia (RTVS)— desempeñó un papel importante en el fortalecimiento activo del respeto y la valoración de la diversidad de las minorías nacionales y los grupos étnicos en los medios de comunicación. La oferta programática de RTVS comprendía contenidos destinados a desarrollar la conciencia nacional y la identidad cultural de todos los habitantes de la República Eslovaca. RTVS estaba obligada a ofrecer contenidos y programas

equilibrados desde el punto de vista regional para las minorías nacionales y los grupos étnicos.

Información relativa a los párrafos 58 y 59

300. A solicitud de la entidad fundadora, el Ministerio de Educación puede clasificar un centro como escuela de minoría nacional (con lengua de enseñanza de una minoría nacional) o como clase de minoría nacional (con lengua de enseñanza de una minoría nacional). Las minorías nacionales húngara, rutena, ucraniana, alemana, rusa, romaní y búlgara han ejercido su derecho a la educación en su lengua materna. Eslovaquia cuenta con cuatro escuelas primarias en las que se enseña el romaní y cinco escuelas secundarias en las que el alumnado puede presentarse al examen de fin de estudios en este idioma. Los estudios pueden proseguirse en la Universidad de Prešov, en el programa pedagógico “Lengua, literatura y realidades romaníes”. Se ha creado una escuela piloto de carácter étnico romaní en el municipio de Rakúsy. Este proyecto constituye un paso importante para apoyar la mejora de la calidad de la educación de la minoría romaní en el país.

301. El Ministerio de Educación aprobó la versión consolidada de los programas estatales de educación para las escuelas primarias con efecto a partir del 1 de septiembre de 2022. Esta versión incluye planes de estudios marco para escuelas primarias con lengua de enseñanza eslovaca, para escuelas primarias con lengua de enseñanza de una minoría nacional y para escuelas primarias con enseñanza de una lengua de minoría nacional. Para más detalles, véase el anexo.

302. De conformidad con las obligaciones derivadas de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, el Ministerio de Educación aprobó normas educativas para la enseñanza de la lengua y la literatura búlgaras, checas, croatas y polacas (en 2022 para la educación primaria y en 2023 para la educación secundaria inferior). En el país existen centros en los que se enseña el romaní.

303. Con el fin de promover la inclusión de todo el alumnado, el sistema de medidas de apoyo se introdujo a partir del año escolar 2023/24. Uno de sus objetivos es respaldar el aprendizaje de la lengua de enseñanza del centro por parte de los niños y alumnos cuya lengua materna es distinta de dicha lengua, así como por quienes presentan un dominio inferior al esperado para su edad en la lengua de enseñanza.

304. El Ministerio de Educación está aplicando diversas medidas dirigidas al profesorado que ya trabaja en los centros, en el ámbito de la educación intercultural y con especial atención a la lengua romaní. Para más detalles, véase el anexo.

305. El Ministerio de Educación participa en la ejecución del proyecto piloto del Consejo de Europa *Romani-Plurilingual Policy Experimentation (2022-2025)*, cuyo objetivo es lograr la inclusión de los niños romaníes en la educación a través de un enfoque plurilingüe. El proyecto cuenta con la participación de centros de Eslovenia, Grecia y tres escuelas primarias de Eslovaquia.

Información relativa a los párrafos 60 y 61

306. El Ministerio de Salud considera prioritaria la protección y el apoyo a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las madres, y elabora de manera continua propuestas sobre las orientaciones fundamentales de la política estatal de salud, a la luz de la legislación vigente, de los documentos no legislativos aprobados por el Gobierno y de las propuestas de los órganos consultivos del propio Ministerio.

307. En el ámbito del apoyo a la salud reproductiva, el Ministerio de Salud coopera con especialistas del área médica correspondiente. Según la OMS, hasta el 25 % de los casos de infertilidad en mujeres se deben a la postergación del embarazo. Por ello, se valora la educación positiva en beneficio de la mujer y del niño, así como la minimización del fracaso del tratamiento. Cuando el médico tratante recomienda a una mujer recurrir a la fecundación *in vitro*, resulta esencial, para proteger su salud y descartar riesgos, proceder sobre la base de una evaluación individual de su estado de salud.

308. En virtud de un acuerdo de cooperación de dos años entre el Ministerio de Salud y la Oficina Regional de la OMS para Europa, se está ejecutando un proyecto de promoción de la salud reproductiva orientado a sentar las bases para la creación de una herramienta médica profesional: un documento de política basado en la evidencia para el tratamiento de pacientes y sus parejas con infertilidad, mediante procedimientos diagnósticos y terapéuticos normalizados, incluido el uso de la medicina reproductiva restaurativa, y para ampliar el acceso a la atención de salud en el tratamiento de la infertilidad en las parejas.

Información relativa al párrafo 62

309. El 3 de mayo de 2023, el Consejo Nacional de la República Eslovaca aceptó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y dictaminó que, al tratarse de un tratado internacional en el sentido del artículo 7, párrafo 5, de la Constitución, tenía primacía sobre las leyes nacionales. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura entró en vigor para la República Eslovaca el 19 de octubre de 2023.

310. Se ha establecido un mecanismo nacional de prevención, cuyas actividades llevan a cabo tres instituciones de protección de los derechos humanos: la Defensoría del Pueblo, el Comisionado para la Infancia y el Comisionado para las Personas con Discapacidad. Se ha promulgado legislación para ampliar las competencias de las tres instituciones y otorgarle la facultad de realizar visitas sistemáticas a los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad *de iure* o *de facto*, con el fin de comprobar el trato que reciben en dichos lugares. Los presupuestos de las tres instituciones se han incrementado para poder asumir las nuevas competencias.

Información relativa al párrafo 63

311. El 20 de enero de 2021, el Gobierno aprobó el documento titulado “Visión y estrategia para el desarrollo de Eslovaquia hasta 2030 – Estrategia a largo plazo para el desarrollo sostenible de la República Eslovaca” (en adelante, Visión 2030). El documento se elaboró mediante un proceso participativo en el que intervinieron todas las partes interesadas de la cuádruple hélice, a saber: representantes de la administración pública, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y el mundo académico. Con ello se garantizó el respeto del principio de no dejar a nadie atrás.

312. Visión 2030 se compone de tres programas integrados de desarrollo: protección y desarrollo de los recursos humanos y naturales; uso sostenible de los recursos; y desarrollo comunitario (para más detalles, véase el anexo).

313. El seguimiento y la evaluación están a cargo del Consejo del Gobierno para la Agenda 2030, integrado por representantes de las regiones, interlocutores socioeconómicos y organizaciones no gubernamentales, además de representantes del Gobierno.

314. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ejecutó el proyecto Marco de Seguimiento del Desarrollo Sostenible en Eslovaquia, que concluyó en enero de 2024. El refuerzo ulterior del desarrollo sostenible se llevará a cabo mediante el proyecto Fortalecimiento de la Coherencia de las Políticas para el Desarrollo Sostenible a Nivel Central y Regional en la República Eslovaca. El proyecto cuenta con la aprobación de la Comisión Europea y su ejecución se ha encomendado a la OCDE para el período 2024-2026.

Información relativa al párrafo 64

315. Todos los órganos centrales del Estado responsables de la aplicación de las obligaciones de la República Eslovaca en materia de derechos humanos, así como de las recomendaciones específicas de los Comités de las Naciones Unidas, evalúan de manera continua la implementación de dichas obligaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo elabora anualmente un informe sobre la situación social de la población, que contribuye a la

aplicación de las recomendaciones. El informe se basa en indicadores socioeconómicos en ámbitos como el empleo, el desempleo, la pobreza y la exclusión social, la igualdad de género y la igualdad de oportunidades.

316. La República Eslovaca abordará las recomendaciones en este ámbito al preparar futuros informes sobre la aplicación de instrumentos internacionales y futuras respuestas a las recomendaciones de los Comités de las Naciones Unidas.

Información relativa al párrafo 65

317. Las recomendaciones finales formuladas a la República Eslovaca por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han traducido al eslovaco y se han publicado en los sitios web de los órganos centrales del Estado responsables de las cuestiones abarcadas por el Pacto. En el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos se encuentran públicamente disponibles todos los informes de la República Eslovaca sobre la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que es parte, así como las recomendaciones de los comités pertinentes de las Naciones Unidas sobre esos informes.

318. Las recomendaciones del Comité se presentaron al Gobierno y pueden consultarse públicamente en el portal legislativo Slov-Lex y en el sitio web de la Oficina del Gobierno. El 11 de noviembre de 2020, el Gobierno examinó el documento relativo a las recomendaciones del Comité y aprobó la Resolución núm. 712/2020, mediante la cual encomendó a los ministerios competentes que evaluaran las posibilidades y el alcance de la aplicación de las recomendaciones del Comité y, al mismo tiempo, encomendó a la Oficina del Plenipotenciario del Gobierno para las Comunidades Romaníes, a la Asociación de Ciudades y Municipios de Eslovaquia y a la Unión de Ciudades de Eslovaquia que cooperaran en la aplicación de dichas recomendaciones.

319. Antes de que el Gobierno se reuniera, el informe fue examinado por el Consejo del Gobierno de la República Eslovaca para los Derechos Humanos, las Minorías Nacionales y la Igualdad de Género, órgano permanente de expertos del Gobierno con funciones consultivas, de coordinación y de asesoramiento en materia de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Consejo aprueba dictámenes sobre la aplicación nacional de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Está presidido por el Ministro de Justicia y se integra por los principales órganos e instituciones de la administración pública, así como por representantes de la sociedad civil que trabajan en cuestiones de derechos humanos.
